

La estructura social argentina en la doble crisis (2015-2021)

Transformaciones en el trabajo, los ingresos y las desigualdades de clase

Investigador responsable

Pablo Dalle (UBA)

Autores¹

Pablo Dalle (UBA), Gabriela Benza (UNTREF),

Eduardo Chávez Molina (UBA) y Verónica Maceira (UNGS)

■ Doi: 10.54871/cl23p20d

Introducción. Diseño de investigación del PIRC-ESA

La pandemia de COVID-19 constituyó un *hecho social global y disruptivo* que puso en cuestión dimensiones nodales de la reproducción social de los hogares: la salud, el empleo, la educación de los/as niños/as y adolescentes, la movilidad y el trabajo de cuidados, entre otras. Este hecho social sin precedentes para las generaciones contemporáneas generó efectos adversos de gran alcance sobre el mercado de trabajo y la estructura social de Argentina.

¹ Directores de nodos: Pablo Dalle, Liliana Bergesio, Pablo Barbetti, Alicia Gutiérrez, María Albina Pol, Verónica Maceira, Ana Capuano, Marisol Vereda, Mariana Busso, Gabriela Benza, Andrea Torricella, Eduardo Lépole y Julieta Haidar.

Inicialmente, ante la falta de vacunas y medicinas paliativas y la vertiginosidad de la propagación del virus, tras la irrupción de la pandemia en Argentina en marzo de 2020 el Gobierno Nacional decretó la puesta en vigencia de medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio [ASPO] para evitar el contagio masivo y amortiguar la emergencia socio-sanitaria. Asimismo, el autoaislamiento por el miedo a contagiarse, en tiempos en que la propagación de casos y fallecimientos por el virus era muy elevada, actuaba de por sí restringiendo la actividad económica. En este contexto de restricciones a la movilidad y a la interacción cara a cara, se estimaba que alrededor del 50 % de la población ocupada que ya se encontraba en condiciones de informalidad laboral (entre asalariados y cuenta propia) enfrentaba altos riesgos de perder sus empleos o de no poder trabajar, debido al cierre de numerosas empresas y a la imposibilidad de desarrollar actividades autónomas contacto intensivas. En paralelo a estas tendencias, la emergencia sanitaria condujo a una acelerada virtualización del empleo de amplios sectores de la fuerza de trabajo, y a un crecimiento exponencial del trabajo de *delivery* (denominado última milla).

En el momento de la llegada de la pandemia la Argentina se encontraba en una situación económica y social crítica. Tras un período de cierto estancamiento económico, con vaivenes en el ritmo de actividad y escasa expansión del empleo (2012-2015), el país enfrentó una crisis producida en el marco de cambios en el modelo de desarrollo orientados hacia la liberalización económica y la reinstalación de un patrón de endeudamiento externo y valorización financiera (2015-2019). Esta crisis, que tuvo epicentro entre los años 2018 y 2019, se expresó en una caída del producto bruto (de 2,9 % y 2,5 % respectivamente) y en un fuerte deterioro del mercado de trabajo y los ingresos de los hogares.

En este contexto, desde el Programa de Investigación Regional Comparada sobre la Estructura Social Argentina (PIRC-ESA) nos propusimos abordar los efectos de la doble crisis prepandemia y pandemia (2015-2019) sobre la estructura social desde una perspectiva

centrada en el análisis de clases sociales. En este sentido, planteamos un retorno a los estudios clásicos sobre la estructura de clases de Argentina (Germani, 1955; Sautu, 1969; Torrado, 1992) sumado a los aportes de la perspectiva latinoamericana sobre marginalidad (Nun et al., 1968; Nun, 1969; Germani, 1980) bajo el desafío de realizarlo en el marco de una red nacional de carácter federal, abonando a una mirada de conjunto y relacional desde distintos ángulos de observación.

Los interrogantes que guiaron la construcción del problema de investigación de la Red fueron: ¿qué efectos está produciendo la doble crisis prepandemia y pandemia en el perfil y composición de la estructura de clases? ¿Cuáles son las clases más afectadas en sus condiciones materiales de vida por los efectos de una doble crisis de carácter acumulativo, y qué estrategias desarrollan los hogares de las distintas clases para enfrentarla? ¿Qué acciones colectivas despliegan los agentes sociales en este marco según pertenencia de clase? ¿Cómo influye la intervención del Estado para amortiguar o mitigar los efectos más adversos de la misma? ¿Cómo afecta la doble crisis las dinámicas del mercado de trabajo y la distribución del ingreso? ¿Cuáles son los sectores de actividad económica más afectados? ¿De qué manera las reconfiguraciones en la situación laboral y en los ingresos de las clases sociales producto de la doble crisis se articulan con las desigualdades de género? ¿Cuáles son las especificidades que asume la crisis a lo largo del territorio nacional, y en qué medida se han incrementado las desigualdades regionales? Por último, una motivación de intervención recorría nuestro proyecto: ¿Qué intersticios de oportunidad abre la crisis para repensar el desarrollo en Argentina? ¿Cómo potenciar la creación de empleo y procesos de redistribución del ingreso que permitan mejorar las condiciones de vida de las clases populares y las clases medias?

Objetivos e hipótesis de trabajo

Desde la red PIRC-ESA nos propusimos abordar las reconfiguraciones recientes de la estructura social argentina resultantes de la doble crisis previa y durante la pandemia de COVID-19, caracterizando a las clases sociales y los grupos socio-ocupacionales afectados durante el período (2015-2021) desde una perspectiva comparativa regional y de género. Una de las principales metas del proyecto fue construir diagnósticos de rigor que puedan ser insumos para la elaboración de políticas públicas en la pospandemia.

La hipótesis general del proyecto postuló que la crisis socio-sanitaria de la pandemia de COVID-19 y las medidas de aislamiento preventivo produjeron la emergencia de nuevas problemáticas y afectaciones específicas más allá de grupos históricamente desaventajados propias de un período excepcional, y por el otro, potenciaron desigualdades en la estructura social derivadas de condicionamientos estructurales de mediano y largo plazo, profundizadas por la orientación de las políticas públicas durante el período inmediatamente anterior (2015-2019). En tal sentido, el proyecto debía indagar las particularidades de los efectos de cada crisis y a su vez procesos acumulativos de vulnerabilización social. De ese modo, buscó integrar en el análisis tres temporalidades: i. la crisis económica y social previa a la pandemia, ii. la emergencia socio-sanitaria que tuvo epicentro en 2020, y iii. el período de recuperación económica y recomposición social iniciado durante la pandemia (2021). A su vez, para poder dimensionar el impacto de la doble crisis y dar cuenta de la relación entre las transformaciones en la estructura de clases y la direccionalidad que asume el modelo de desarrollo económico social en distintos períodos, el estudio incorporó una ventana temporal más amplia (2003-2021).

Con esta orientación general, el proyecto desplegó un conjunto de objetivos específicos:

- i. Analizar la evolución de la estructura de clases en el período 2015-2019 poniendo el foco sobre las desigualdades entre posiciones de clase en la esfera laboral, los ingresos y el consumo de los hogares.
- ii. Analizar los efectos de la doble crisis en la estabilidad/inestabilidad laboral, las condiciones de trabajo y la continuidad / discontinuidad de ingresos laborales según clases sociales y la articulación de los hogares en programas de intervención estatal desplegados en la coyuntura de la pandemia de COVID-19 o anteriores.
- iii. Indagar las tendencias en la distribución del ingreso a nivel nacional y regional, en relación con la evolución de las posiciones de clase y grupos socio-ocupacionales, tomando en consideración el papel redistributivo de la intervención estatal de nivel nacional y subnacional durante el período.
- iv. Caracterizar a las posiciones de clase y los grupos socio-ocupacionales que fueron afectados durante el período considerando:
 - a. una perspectiva diacrónica que permita comprender no solo su situación en la coyuntura analizada sino las condiciones de su reproducción social, estableciendo patrones de trayectorias socio-ocupacionales y estrategias que den cuenta de procesos de vulnerabilización en el mediano plazo.
 - b. una mirada sectorial que permita describir reestructuraciones en actividades de relevancia a nivel nacional y regional y su impacto en el empleo, las condiciones de trabajo y los ingresos.
- vi. Analizar la dinámica de tres sectores estratégicos: i. Economía popular, ii. Construcción y logística y iii. Universidad / sistema científico-tecnológico, vinculados a tres pisos o niveles en la estructura de clases que podrían traccionar la creación de empleo calificado y

registrado, donde podía promoverse la intervención estatal durante la crisis vinculada a la emergencia socio-sanitaria.

- a. Reconstruir a través de actores claves un diagnóstico del impacto de la doble crisis en las condiciones de trabajo en el sector y las estrategias para un proceso de reactivación del entramado productivo y ocupacional que puedan expandir canales de incorporación de amplios sectores de la fuerza de trabajo.
- b. las experiencias de organización para sostener el trabajo y reproducir las condiciones materiales de vida de trabajadoras y trabajadores de estos sectores durante la pandemia.

Perspectiva teórica general

El análisis de los procesos de desigualdad en la estructura social se asienta en las teorías sobre el análisis de clases sociales. Los principales enfoques teóricos contemporáneos neomarxistas y neweberianos coinciden en que las clases sociales definen condiciones materiales de existencia y oportunidades de vida similares según el control / exclusión de recursos estratégicos de propiedad de capital, autoridad y calificaciones que definen la posición en relaciones de explotación, dominación y monopolización con base en mecanismos de cierre social. Sobre esta plataforma estructural se cimientan experiencias de vida comunes, cierta sociabilidad compartida, la construcción de una identidad cultural, estilos de vida similares y procesos de organización y acción colectiva (Germani, 1955; Wright, 1979, 2018; Hout, 2008).

Estas perspectivas fueron trabajadas en articulación con los aportes de la tradición teórica latinoamericana sobre la relación entre modelos de desarrollo económicos y sus efectos sobre la estructura de clases (Germani, 1955, 1963, 1970; Sautu, 1969, Torrado, 1992, 1997), en la cual ocupan un lugar destacado las indagaciones sobre

el carácter de clase de la marginalidad y el empleo informal en formaciones sociales capitalistas periféricas (Nun et al., 1968; Germani, 1980).

El proyecto PIRC-ESA partía del supuesto de que las relaciones de clase constituyen un mecanismo explicativo primordial en la estructuración de la desigualdad de condiciones de vida y de oportunidades, en tanto incide sobre las probabilidades de acceso a recursos de distinto tipo (económicos, simbólicos, lazos sociales, tecnologías,² etcétera) y, con ello, implican acumulación de ventajas o desventajas, lo que en el marco de una emergencia socio-sanitaria implica una desigual exposición a los riesgos de enfermedad, la pérdida de empleo e ingresos, los impactos negativos sobre las condiciones de trabajo o educativas, entre otras.

El proyecto buscó avanzar en la articulación de las desigualdades de clase con las de género y regionales. Si bien hemos iniciado este camino como red y en los trabajos de investigación se pueden observar pautas empíricas que reflejan la acumulación de desigualdades, queda mucho recorrido por hacer para avanzar en un programa de investigación que parta de la interseccionalidad como premisa teórica.

El proyecto PIRC-ESA incorporaba a su vez la consideración del ámbito socio-productivo y de sectores de actividad económica específicos, dado que el impacto en el mundo laboral de la doble crisis fue marcadamente diferencial según ramas de actividad, así como en función de la inserción en el sector formal o informal, y en este último de acuerdo a la presencia o no de organizaciones de la economía popular.

² López y Hermida (2022) analizan el equipamiento de computadoras, servicios y tecnologías de la comunicación según clase social del hogar y sus efectos en las condiciones de educación formal de niñas/os y adolescentes durante la emergencia sociosanitaria.

Diseño metodológico

El estudio desplegó una estrategia metodológica multimétodo que consistió en la utilización articulada de métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas en una secuencia no lineal (Patton, 2002; Sautu, 2019). Para analizar la evolución de la estructura de clase, el mercado de trabajo y la distribución del ingreso, identificando y caracterizando los grupos afectados según sectores de actividad económica durante el período 2015-2021, se analizaron dos fuentes estadísticas secundarias: la Encuesta Permanente de Hogares [INDEC] y el Sistema Integrado Previsional Argentino [SIPA] proveniente de Registros Administrativos de la Seguridad Social aportados por la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social [MTEySS].³

La columna vertebral del proyecto fue la encuesta nacional sobre la Estructura Social de Argentina y Políticas Públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP / PISAC-COVID-19). La encuesta fue diseñada y coordinada por dos Proyectos PISAC-COVID-19: el proyecto dirigido por Mercedes Di Virgilio y el proyecto de nuestro equipo, dirigido por Pablo Dalle, con la participación de investigadoras e investigadores de todos los nodos de ambos estudios. El diseño de la muestra fue de carácter probabilístico con tres dominios de estimación: la Argentina urbana (aglomerados de más de 50 000 habitantes), por regiones y tamaño de aglomerados. El trabajo de campo se realizó entre octubre y diciembre de 2021 siendo la muestra final de 5239 casos.⁴ La distribución de las principales variables

³ El análisis de la EPH nos permitió obtener una dinámica de conjunto del empleo de la Argentina urbana. La ventaja específica de incorporar la información proveniente del SIPA es que se trata de un registro con cobertura nacional de todo el empleo registrado (tanto dependiente como independiente, tanto cuenta propia como empleadores) permitiendo mayor desagregación sectorial y territorial. La información del SIPA está acotada al universo de la economía formal quedando fuera de su alcance el conjunto de trabajadores no registrados o informales, cuya evolución fue analizada desde la EPH.

⁴ El diseño de la muestra y la realización del trabajo de campo fue realizado por la Fundación de Educación Superior-MFG, una consultora especializada en la

socio-demográficas, las tasas básicas del mercado de trabajo e indicadores socioeconómicos como el nivel de pobreza con los datos de nuestra encuesta muestran resultados similares a los del 4.º trimestre de la EPH (ver Dalle, 2022).

El diseño de la encuesta ESAyPP / PISAC-COVID-19 presenta las siguientes potencialidades para estudiar los efectos de la pandemia (Dalle y Di Virgilio, en prensa). En primer lugar, se trata de una herramienta de trabajo que permite indagar los efectos de la emergencia socio-sanitaria con mayor profundidad que las fuentes estadísticas secundarias. Se construyeron indicadores específicos para medir el impacto de la pandemia en varias dimensiones de la vida social: la salud, la educación, las condiciones de reproducción de los hogares, el empleo, los ingresos, la movilidad social intra e intergeneracional, el trabajo doméstico y de cuidado, la identidad de clase y la participación en acciones colectivas de protesta y la evaluación de políticas públicas, entre otras. Estas temáticas se analizaron desde las siguientes claves analíticas: las clases sociales, las regiones, el género y el efecto de las políticas públicas para mitigar los efectos adversos de la pandemia. La encuesta condensa un amplio abanico de indicadores que, al estar reunidos en un mismo instrumento, permiten avanzar en el análisis de *patrones de asociación* y *factores causales*, a través de modelos estadísticos multivariados que permiten contrastar hipótesis de trabajo en el campo.

Segundo, la ESAyPP / PISAC-COVID-19 tiene una amplia cobertura, en tanto tuvo como propósito central desarrollar una perspectiva comparativa interregional. En la muestra se observa un número muy amplio de casos repartidos en puntos muestra en todas las provincias del país y varios puntos muestra por región (incluso más que la EPH), elementos centrales para abarcar la heterogeneidad de la estructura social de Argentina. Si bien la aplicación de una encuesta propia a una muestra probabilística de gran escala era muy costosa, la decisión del PIRC-ESA de utilizar este método se basó en que se

investigación social aplicada, dirigida por Isidro Adúriz.

trata de una fuente idónea para una correcta medición de la magnitud del impacto de la pandemia en la estructura social y el acceso de los hogares a las políticas públicas de prevención y mitigación de daños.

Finalmente, por su diseño la ESAyPP / PISAC-COVID-19 permite una complementación y comparación con otras fuentes del Sistema Estadístico Nacional y con la ENES-PISAC (2014/5). En relación a la ENES-PISAC, cuyos aspectos centrales del diseño fueron considerados como antecedentes (Maceira, 2015; Hoszowski y Piovani, 2018), brinda la posibilidad de analizar cambios y continuidades en las condiciones de reproducción social de los hogares en relación a transformaciones contextuales macroeconómicas y en la orientación de políticas públicas en el período 2015-2021.

Para profundizar en los efectos de la pandemia en determinados sectores de actividad y segmentos de clase social se realizaron entrevistas semiestructuradas a 50 informantes clave (representantes sindicales, de movimientos sociales, directivos de empresas o cámaras empresariales, funcionarios del Estado) y 16 trabajadoras/es de tres sectores estratégicos: i-el complejo de educación superior y sistema científico-tecnológico; ii-las actividades de construcción y logística, y iii- la economía popular.

Conformación del equipo de trabajo

La investigación fue realizada por el Proyecto de Investigación Regional Comparada sobre la Estructura Social de la Argentina [PIRC-ESA], una red de investigación que nuclea a más de 130 investigadoras/es de 13 nodos y 17 centros de investigación de todas las regiones del país. La red constituye un espacio para el intercambio y difusión de investigaciones científicas sobre las dinámicas de desigualdad en la estructura social de Argentina según clases sociales, diversidad regional y de género. Diversas disciplinas y perspectivas teórico-metodológicas se complementaron y articularon dando origen al PIRC-ESA.

La red PIRC-ESA tuvo un carácter federal no solo en su conformación sino también en su dinámica de trabajo: i) en relación con la estrategia metodológica, tanto los instrumentos de producción de evidencia empírica como los análisis fueron trabajados por todos los nodos complementando miradas, perspectivas teóricas y formas de trabajo con los datos; ii) se desarrollaron investigaciones en clave comparativa interregional, y iii) se realizaron jornadas de presentación de resultados que a través del intercambio potenciaron los estudios realizados. La investigación sobre el impacto del COVID-19 sobre la estructura social sirvió de estímulo para la conformación y consolidación de una Red de investigación sobre la estructura social de Argentina a escala nacional y regional cuyas actividades en común continúan tras la investigación que le dio origen.

Las/os investigadoras/es del proyecto nos organizamos en cinco ejes de trabajo vinculados con la producción de evidencia empírica para abordar los objetivos del proyecto y con la difusión de los avances de investigación. Cada eje de trabajo contó con la participación de investigadores/as de todos los nodos para garantizar un análisis en perspectiva comparativa regional. Los ejes de trabajo fueron: 1) diseño e implementación de la Encuesta ESAyPP / PISAC-COVID-19, 2) entrevistas, 3) análisis de fuentes estadísticas secundarias, 4) revisión de antecedentes,⁵ y 5) divulgación y transferencia. En el marco del último eje, construimos una página web para difundir los resultados del proyecto y sentar las bases del Programa de Investigación (<http://pircesaiigg.sociales.uba.ar/>).⁶

El intercambio a través de plataformas digitales permitió una formidable experiencia de vinculación interregional, intergeneracional e interdisciplinaria. La red propició el intercambio intergeneracional

⁵ Se construyó un repositorio de artículos, libros y documentos vinculados al impacto del COVID-19, que sirvieron de estado del arte para publicaciones de la red y se realizaron encuentros interregionales (virtuales) de discusión / intercambio sobre la bibliografía, elaborando documentos de síntesis que fueron socializados.

⁶ En la página web se describen las instituciones participantes en la red y las/os investigadores responsables de cada uno de los nodos.

y el fortalecimiento y consolidación de una amplia red federal, enriqueciendo la producción colectiva. Los resultados de la investigación dieron lugar a la organización de jornadas de difusión en distintos puntos del país, así como a publicaciones en diversas revistas académicas y a la compilación de un libro de dos tomos que incluye contribuciones de integrantes de todos los nodos sobre las distintas dimensiones abordadas en el proyecto.⁷ En lo que sigue, sintetizamos algunos de los principales hallazgos de la investigación.

El mundo del trabajo en la doble crisis

Tendencias generales

Desde el proyecto se realizaron un conjunto de indagaciones sobre la dinámica del mercado del trabajo durante la doble crisis 2015-2021, en el marco de su estrecha vinculación con las políticas macroeconómicas, la evolución del nivel de actividad y las políticas de empleo y sociales del Estado (Dalle y Actis Di Pasquale, 2021; Actis Di Pasquale, Gallo y Capuano, 2022).

Tras el período de crecimiento económico y fuerte expansión del empleo 2003-2012 (Beccaria y Maurizio, 2017) comenzaron a observarse oscilaciones en la evolución de la actividad económica, y limitaciones a la expansión del empleo del sector privado entre 2013 y 2015; sin embargo, hasta el final del período esto no se tradujo en un impacto regresivo sobre el mercado de trabajo y la estructura socio-ocupacional. El cambio hacia un modelo de acumulación en el que adquiere centralidad la valorización financiera a fines de 2015, a través de medidas de apertura comercial, liberalización de precios internos (como las tarifas de servicios públicos) y endeudamiento, derivó en una crisis económica hacia 2018 que tuvo un impacto

⁷ Dalle, Pablo (comp.) (2022). *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia*, IIGG UBA- Agencia I+D+i / Imago Mundi. Una síntesis de las publicaciones y jornadas realizadas en el marco del programa puede verse en la página web de la Red.

regresivo en el mercado de trabajo. Aumentó la desocupación y la subocupación (+ 1,3 puntos y + 2,8 puntos, respectivamente) y muy especialmente, se asistió a una caída de la tasa de asalarización (de -2,8 puntos) y de los salarios reales, lo que implicó un punto de inflexión respecto de las tendencias que distinguían a la etapa previa. En particular, durante esta crisis se observa un incremento de la tasa de actividad (de 1,9 puntos para el total urbano nacional) particularmente de las mujeres (+2,8 puntos) y más en general de los y las trabajadores secundarios en aquellos hogares de la clase trabajadora (Maceira, 2021). Esta presión mayor sobre el mercado de trabajo en el contexto de una retracción de la absorción de empleo asalariado redundó en su conjunto en el aumento mayor del empleo refugio, esto es, inserciones en el cuentapropismo de bajos niveles de capitalización y calificación (con variación relativa de +20,2 % entre 2016 y 2019 y de +27,5 % si tomamos como referencia el IV trimestre 2014). Esta pauta fue mayor en las mujeres: el crecimiento del empleo cuenta propia como medio de complementar ingresos en el hogar para enfrentar la crisis fue muy significativo, incrementando en más de 4 p. p. (de 15,8 % a 20,1 %).

El impacto de la emergencia socio-sanitaria y el ASPO produjo entre el primero y segundo trimestre de 2020 una caída de 8,5 p. p. en la tasa de actividad (de 47,1 % a 38,4 %), de 8,6 p. p. en la tasa de empleo (de 42,3 % a 33,4 %) y un aumento de la desocupación de 2,7 p. p. (de 10,1 % a 13,1 %) (con base en EPH-INDEC). La caída del empleo involucró fundamentalmente al asalariado no registrado y, en segundo lugar, al cuentapropismo de baja capitalización, segmentos que tienen un predominio en las ramas de actividad que fueron más afectadas por las restricciones a la circulación por la pandemia y que por su carácter informal no fueron alcanzados por las medidas protectoras del empleo durante el período. En este marco, la pérdida de empleos afectó especialmente a las mujeres, con mayor presencia relativa en el sector informal. En suma, la pandemia y las medidas para evitar la propagación del virus tuvieron un impacto diferencial en el empleo de mujeres y varones en detrimento de las primeras, quienes además

se vieron más afectadas en relación al incremento de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas que realizan al interior de sus hogares o en las comunidades barriales (Actis Di Pasquale et al., 2022; Belloni, Brown y Fernández Massi, 2022).

Durante la recuperación económica entre fines de 2020 y 2021 se observa una mejora paulatina de los indicadores laborales. Para el cuarto trimestre de 2021, momento en el que se realiza la medición de la ESAPyPP-COVID-19, la tasa de actividad económica era 46,9 %, alcanzando casi el nivel de fines de 2019 (47,2 %); la tasa de empleo había recuperado niveles previos (43,6 %), y la tasa de desocupación había descendido a 7 %, siendo incluso más baja que a fines en 2019 (8,9 %). En este contexto se destaca el crecimiento del asalariado registrado (de distinto nivel de calificación, pero especialmente de calificaciones operativas) tanto en términos interanuales como respecto de los niveles prepandemia (con variación relativa de + 12,5 % y 8 %, respectivamente). Por su parte, también se expande en términos interanuales el asalariado no registrado, más fuertemente impactado durante el ASPO, sin alcanzar el nivel de ocupación de la prepandemia. Esto último remite en parte a la retracción relativa del empleo en casas particulares, retracción que se mantiene hasta el momento de la mencionada medición.

Las dos crisis analizadas (2015-2019 y 2020), de raíces diferentes, tuvieron efectos diferenciales sobre el empleo según ramas de actividad. La crisis prepandemia, asociada a una reinstalación del modelo de desarrollo económico de valorización financiera y a una pérdida de importancia de las actividades productivas vinculadas al mercado interno, provocó una caída importante del empleo asalariado registrado en la industria manufacturera y la construcción. En la industria manufacturera fueron afectadas sobre todo actividades intensivas en el uso de fuerza de trabajo, que se vieron perjudicadas por la apertura comercial, el incremento sustantivo de las tarifas de servicios públicos y las sucesivas devaluaciones. Por su parte, durante la crisis de la emergencia sanitaria y el ASPO, se evidenció una fuerte caída del empleo en las ramas de servicio doméstico, construcción,

alojamiento y servicios de comidas, comercio y reparaciones, con la excepción del incremento del empleo en la logística de última milla (servicios de *delivery*). La reactivación económica desde fines de 2020 destacó por un crecimiento del empleo en la industria, la construcción y servicios vinculados a la producción (Dalle y Actis Di Pasquale, 2021).

El análisis de las tasas básicas y las categorías ocupacionales por regiones nos permite avanzar en una perspectiva comparada. Antes de determinar el efecto de la doble crisis en el mercado de trabajo de cada región es preciso señalar que cada una de ellas presenta diferentes niveles de participación económica y de empleo, vinculadas al grado de desarrollo económico y a las características de sus estructuras productivas (Pol, Paz y Galetto, 2022). Hacia 2015, el GBA registraba la mayor tasa de actividad (70 %) y de empleo (63 %), seguido por la Región Pampeana (que incluye la zona Centro del PISAC) (67 % y 61 %), Patagónica (65 % y 61 %), Cuyo (64 % y 60 %), NOA (63 % y 58 %) y NEA (56 % y 53 %).

La composición de la población ocupada según categoría ocupacional también difería entre regiones. Al final del período de expansión económica y asalarización (2015), Patagonia presentaba la mayor proporción de asalariados registrados (67 %) mientras que NOA, NEA y Cuyo presentaban los niveles más bajos (44 %, 45 % y 47 %, respectivamente). En una situación intermedia se encontraban el GBA y la Región Pampeana, con 52 % y 51 %, respectivamente.

En la crisis de la prepandemia se produjo, como vimos, un deterioro generalizado en la composición del empleo y, en particular, una caída en la tasa de asalarización. En todas las regiones –con excepción del NEA– se repiten estas tendencias: cayó el empleo asalariado registrado y aumentó el cuentapropismo, sobre todo de escasa calificación y de tipo informal. La mayor reducción del empleo asalariado registrado se observa en el GBA y en la Región Pampeana, producto de la caída de la actividad industrial, mientras, por efecto contracíclico, el mayor crecimiento del empleo cuenta propia, sobre

todo de tipo informal, de tipo refugio, se evidencia en el NEA, GBA y Pampeana.

La crisis de la pandemia tuvo un mayor impacto relativo en el nivel de empleo en las zonas más postergadas profundizando desigualdades históricas. Las mayores caídas en las tasas de actividad y empleo se produjeron en NEA, NOA y el GBA (principalmente en los Partidos del conurbano bonaerense donde se concentran núcleos de marginalidad). El desempleo, por su parte, se incrementó más en Cuyo, la Región Pampeana (incluyendo Centro) y GBA. En Cuyo y NEA se observó la mayor caída del peso relativo del empleo asalariado registrado en la seguridad social, de 3 p. p. en la primera y de 2,3 en la segunda.

Subsectores económicos: transformaciones en las condiciones de trabajo y respuestas frente al COVID-19

Como mencionamos en la introducción, profundizamos el estudio de los efectos socio-ocupacionales en tres sectores de actividad: el sistema científico y universitario, construcción y logística, y economía popular. Estos sectores fueron elegidos atendiendo a un doble criterio: que involucren la inserción de trabajadores con distintos niveles de calificación y, por tanto, la pertenencia a tres estratos distintos de la estructura social, y que sean sectores en los que el Estado pueda implementar políticas para impulsar el desarrollo económico y social en la postpandemia.

Sistema científico y universitario

Se trata de un sector cuyo colectivo de trabajo se caracteriza por altos niveles educativos y que tiene además una preeminencia del empleo regulado, aun cuando parte del mismo es a tiempo parcial. De acuerdo a la investigación del equipo (Unzué et al., 2022) gran parte de las instituciones educativas y de investigación experimentaron el cierre físico, pero con sostenimiento de tareas, estando atravesadas por al

menos tres problemáticas en términos de sus condiciones de trabajo. En primer lugar, la virtualización de gran parte de las tareas (administrativas, científicas y de formación) y la necesidad de aceleradas capacitaciones y adaptaciones en esa dirección. Particularmente en el caso de las y los docentes, esto implicó un esfuerzo significativo asumido a costa de sobrecarga laboral y estrés y en general sin compensación económica. Las políticas de capacitación fueron asimismo limitadas. Se destaca también la heterogeneidad regional e institucional de las respuestas entre unidades académicas, las que dependieron de distintos factores, desde la magnitud y complejidad de cada una de ellas hasta sus perfiles idiosincrásicos, algunas con el abandono total y otras con ciertas formas de acompañamiento.

En segundo lugar, y en articulación con lo anterior, la adecuación y adquisición de nuevos medios de trabajo para este proceso (equipo y conexión) supuso una inversión que solo muy parcialmente estuvo a cargo del empleador. En el caso de las universidades, las adaptaciones estuvieron orientadas al plantel administrativo y al estudiantado, pero con poca presencia en los/as docentes. Esta situación desencadenó un conflicto que condujo a un tardío acuerdo paritario de reconocimiento de gastos de conectividad, pero sin asistencia para el acceso a equipamiento.

En tercer lugar, otra problemática del sector se vinculó con las dificultades de conciliación entre el trabajo extradoméstico y el doméstico, habida cuenta del traslado de la actividad laboral al hogar junto con la interrupción de los dispositivos de cuidado usuales para los/las miembros dependientes. Esta problemática hizo crisis en el período, pero expresa a su vez desigualdades estructurales de género (Torricella y Toyos, 2022). En este marco, las respuestas fueron diversas. En particular, la solicitud de licencias por cuidado fue más recurrente entre las trabajadoras administrativas y menos entre las científicas, en la medida en que esta solución coyuntural involucra en el medio plazo un incremento de las desigualdades de género al postergar las chances de producción, y por tanto de carrera, de las científicas en edad reproductiva. Asimismo, entre las docentes las

licencias por cuidado no fueron una opción, en tanto no se encontraban vigentes en el convenio colectivo de trabajo. Frente a ello, las universidades las acotaron a “dispensas” (permisos que liberaron a el/la trabajadora de una carga total o parcial de tarea), las que tampoco prosperaron en la medida en que dejaban vacante un puesto para el que no se contemplaban suplencias, cuestión fuertemente disuasiva al recargar al colectivo de trabajo.

Los sindicatos advirtieron que la toma de decisiones sobre el sector se realizó sin convocatoria a las representaciones gremiales y reclamaron la suspensión de los procesos de evaluación durante el período. En el caso de las actividades de investigación más directamente ligadas al COVID-19 y de quienes trabajan con sustancias o equipos técnicos que requieren presencialidad, se desarrollaron protocolos de bioseguridad. La investigación del equipo destaca que las articulaciones con las Comisiones de Medio Ambiente y Trabajo [CyMAT] o con los sindicatos permitieron la organización de ciertas normativas o protocolos, aun para el trabajo domiciliario, que fueron producto de negociaciones complejas y con no pocas dificultades.

En relación con el papel de los y las trabajadoras universitarios y científicos en la pandemia, se destaca que: i) en general los y las docentes pudieron responder exitosamente al desafío que supuso la pandemia, si bien a costa del sobre esfuerzo mencionado; ii) los/las investigadores tuvieron la demanda de reperfilar sus líneas de investigación para atender la excepcionalidad de la crisis sociosanitaria, así como de “traducir” los resultados de investigación (muchas veces provenientes de líneas de ciencia básica) a recomendaciones que pudieran ser tomadas desde la urgente intervención estatal, acortando tiempos y aumentando la intensidad del trabajo. Aún con las dificultades propias del diálogo entre ministerios, organismos gubernamentales y sistema científico, los informantes claves han subrayado el objetivo compartido de generar sinergias positivas para responder a demandas y acercar propuestas para llevar adelante según las respectivas competencias.

Logística de última milla

La pandemia marcó un punto de inflexión en el desarrollo del servicio del *delivery*. Declarado servicio esencial y promovido por las disposiciones de aislamiento preventivo y por el riesgo de contagio, durante esta etapa el servicio de *delivery* registró una gran expansión, en un marco caracterizado por una alta concentración del sector. En relación con la dinámica laboral, la investigación llevada adelante en nuestro proyecto (Haidar y Bordarampé, 2022) establece que las plataformas de reparto se constituyen como actividad refugio, extremadamente informal. Si en un primer momento los migrantes y especialmente los de procedencia venezolana tuvieron decisiva presencia, sobre todo en CABA, la crisis sociosanitaria aumentó la población excedente de origen nativo, y con ello su incorporación a este colectivo de trabajo, incluyendo un mayor número de mujeres. El estudio permite observar que el contexto de crisis fue también un momento de intensificación del trabajo de las/los repartidores, quienes aumentaron el número de pedidos entregados, pero no así sus ingresos. La contracara fue una mayor captación de ganancias por parte de las empresas de plataforma.

Al respecto, como estudiaron Menéndez y Arias (2022) en el marco del PIRC, estas condiciones fueron enfrentadas por la conflictividad laboral y la organización creciente del colectivo de trabajo, que, si bien se inician con la emergencia del sector, encuentran un punto de inflexión con el cambio de gobierno y la pandemia. Las organizaciones se encuentran fragmentadas y presentan una gran heterogeneidad, pudiéndose clasificar en tres tipos: i) las de carácter sindical que cuentan con algún reconocimiento legal, que tienen existencia previa a la llegada de las plataformas al país y pretenden incorporar a los y las trabajadores en la regulación de la actividad de reparto; ii), las que emergieron con las plataformas, de carácter sindical pero sin reconocimiento legal y que aspiran al registro de la relación laboral, y iii) un conjunto de agrupaciones ligadas en general a partidos de izquierda. El contexto de la pandemia favoreció la confluencia

en el reclamo de mejores ingresos y condiciones de vida por parte de estas organizaciones. Se obtuvieron mejoras a corto plazo, pero no conquistas de mediano y largo plazo asociadas a la obtención de derechos laborales. Sin desmedro de ello, lograron también ampliar la visibilidad de la problemática y articularse con organizaciones de alcance global.

Asimismo, el nivel de concentración del mercado y el control de la distribución a través del *delivery* y de recursos de marketing a través de la plataforma, permitió a estas empresas aprovechar el contexto de la pandemia aumentando el número de locales gastronómicos con los que operan, ejerciendo a su vez poder sobre ellos, lo que se expresa en i) la determinación de comisiones abusivas, ii) el control por medio de la gestión algorítmica, y iii) la inducción de decisiones sobre los procesos productivos. Los y las investigadoras coinciden en la necesidad de la intervención estatal para regular y hacer cumplir las regulaciones vigentes.

Construcción

Desde el PIRC-ESA analizamos la dinámica del sector de la construcción dado su papel estratégico para promover el encadenamiento productivo “hacia atrás” (industrias básicas de insumos) y “hacia adelante” (financiarización y comercialización), y por lo tanto como multiplicador de oportunidades ocupacionales (Sala y Del Águila, 2022). Asimismo, si bien el sector se destaca por su elevada capacidad de generación de puestos de trabajo, los altos niveles de informalidad y precariedad que lo distinguen advierten sobre la necesidad de una mayor intervención estatal para garantizar los derechos de los trabajadores del sector.

Al igual que en otras partes del mundo, en la Argentina la construcción fue una de las actividades más afectadas por las limitaciones a la circulación producto de las medidas preventivas tomadas por la pandemia. Así, en nuestro país el sector registró hacia junio de 2020 una caída del 75,6 % interanual (INDEC, 2020). Sin embargo,

Sala y Del Águila (2022) muestran heterogeneidades considerables en lo que refiere al impacto sufrido por cooperativas, pymes o grandes empresas constructoras. A nivel de las experiencias individuales, mientras hubo una mayoría que dejó de percibir ingresos, los trabajadores en relación de dependencia continuaron percibiendo salarios mientras los trabajadores cooperativistas de barrios populares percibieron el “Salario Social Complementario” o el Plan “Haciendo Futuro”, ambos del Gobierno Nacional.

Si bien el sector fue uno de los más golpeados, también fue uno de los que mostró una recuperación más acelerada. La construcción comenzó a reactivarse desde fines de 2020, en un proceso en el que destaca la reducción del porcentaje de asalariados registrados y no registrados y el crecimiento del cuentapropismo, al menos hasta el tercer trimestre de 2021. La expansión de la construcción estuvo motorizada por el aumento de la inversión privada, pero también por la inversión estatal en renovación urbana, desarrollo de infraestructura y provisión de servicios básicos en barrios populares del conurbano bonaerense y regiones históricamente postergadas. El desarrollo de estas obras en muchos casos tuvo lugar en articulación con la economía popular a través del programa de empleo Potenciar Trabajo (Schmidt et al., 2022). Dichos proyectos permitieron aunar dos objetivos: orientar el desarrollo en perspectiva federal y expandir empleo de calificación operativa y técnica.

Economía popular

El profundo declive social del mercado laboral durante la doble crisis tuvo múltiples expresiones de resistencia en las clases populares. La pandemia permitió visibilizar las limitaciones del mercado de trabajo formal para garantizar la inserción de una parte relevante de la fuerza de trabajo, así como la fuerte presencia de las organizaciones populares y su extraordinaria activación para mitigar los efectos adversos de la crisis en los barrios populares. Varias investigaciones de la red indagaron el papel estratégico de las organizaciones de la

economía popular durante la emergencia sociosanitaria para garantizar la reproducción social de la vida.

Si bien su génesis se remonta a la lucha frente a la desocupación y la precarización laboral que acompañaron a las reformas neoliberales en Argentina en la década de 1990 y, aún antes, a las luchas por la tierra y la vivienda de la década de 1980 en las periferias de las grandes ciudades, se consolidaron durante el kirchnerismo aun en un contexto de crecimiento del empleo formal, como una vía alternativa de conquista de derechos sociales, y se expandieron durante la restauración conservadora neoliberal. Frente a la caída del empleo asalariado formal y un incremento del cuentapropismo de bajos ingresos en este último período (2016-2019), estos sectores cobraron protagonismo en el espacio público a través de marchas y manifestaciones, y también en el espacio y la agenda política, donde lograron la aprobación de la Ley de Emergencia Social [LES], sancionada en 2016, representando un avance en el reconocimiento formal de los trabajadores de la Economía Popular. La misma permitió la creación del Consejo de la Economía Popular y la implementación del Salario Social Complementario [SSC] y preveía la creación de un Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular [RENATEP] que fue puesto en vigencia en 2020. En 2019, distintos sectores y organizaciones que luchaban por la representación de trabajadores de barrios populares que realizaban actividades laborales no formales, lograron unificarse al crear la Unión de Trabajadores de la Economía Popular [UTEPE] (Busso et al., 2022).

El RENATEP se implementó a partir de junio de 2020, y desde entonces hasta febrero de 2022 se registraron como trabajadores de la Economía Popular más de 3 225 268 personas. Su composición es feminizada (57,8 % son mujeres) y juvenil (27,1 % tiene entre 18 y 24 años, y 37,3 % entre 25 y 35 años) y sus actividades se concentran en los Servicios Socio-comunitarios (28,8 %) y Servicios Personales y otros oficios (33,6 %) (MDSN, 2022).

El concepto de economía popular surge de las organizaciones sociales del campo social y popular y se construye de forma conjunta

con referentes del campo académico y político desde una perspectiva que pone el foco en el desarrollo de estrategias de los trabajadores, que se vieron obligados a crear formas de trabajo e ingresos, de manera territorialmente situada, en áreas donde el mercado no llega (Zibechi y Barbetti, 2022; Labrunee y Gispert, 2022).

Durante la emergencia socio-sanitaria, la multiplicación de redes de apoyo y contención permitió reconvertir o sostener la producción en las cooperativas o espacios de trabajo, articularse entre distintas ramas de la economía popular, por ejemplo, entre actividades de producción y comercialización, al mismo tiempo que parte de los espacios productivos se reconvirtieron en comedores y merenderos para organizar la asistencia alimentaria. Las organizaciones de la Economía Popular no se replegaron, sino que desarrollaron estrategias efectivas para *sostener la vida* con base en su acervo de saberes acumulados de trabajo *en y desde* el barrio (Fernández Álvarez et al., 2022). Siguiendo esta línea, el estudio de Kasparian, Súnico y Naranjo (2022) muestra que las empresas recuperadas mostraron una alta capacidad de respuesta y adaptación frente a un contexto muy adverso, recurriendo al acervo de saberes previos y destacándose las cualidades propias del trabajo asociativo y autogestionado.

La relación con el Estado durante la pandemia fue compleja. La intervención del Estado estuvo centrada principalmente en la contención de los efectos negativos del aislamiento preventivo a partir de políticas de transferencia de ingresos como el IFE, el fortalecimiento de la AUH, la Tarjeta Alimentar y programas específicos para apuntalar la economía popular como el Potenciar Trabajo y el Programa de Trabajo Autogestionado [PTA] (Natalucci et al., 2022). Los referentes estatales destacan avances en la importancia asignada a la Economía Popular en términos presupuestarios y su jerarquización en el Ministerio de Desarrollo Social, sin embargo, comparten dos diagnósticos: i. las urgencias y necesidades de la economía popular contrastaron con los tiempos burocráticos del Estado (González et al., 2022), mientras la desarticulación ministerial en la gestión de recursos y subsidios dificultó la asistencia (Natalucci et al., 2022); ii.

es necesario rediseñar la relación del Estado con la Economía Popular para que asuma específicamente su carácter como actor productivo (Zibechi y Barbetti, 2022; Ojeda et al., 2022).

En relación con este último punto, las demandas de la Economía Popular se centran en su reconocimiento como trabajadores y productores y no como destinatarios de políticas asistenciales. Como trabajadores, ya conformados como actor sindical [UTEPA], se plantea la necesidad de continuar avanzando en el acceso a derechos sociales: obra social, jubilación, seguro de desempleo. Como productores, las demandas se orientan a obtener herramientas de trabajo, formalización fiscal para facturar, bancarización, acceso a créditos y políticas específicas de comercialización, acceso a tierras. Los/as referentes del sector observan la necesidad de potenciar la formación técnico-profesional (centrada en oficios y saberes productivos) como estrategia de fortalecimiento de las unidades productivas de la economía popular (Busso et al., 2022; González et al., 2022).

La expansión de la economía popular muestra los efectos de la doble crisis sobre una estructura productiva con limitaciones estructurales para integrar la fuerza de trabajo al sector formal, pero también la consolidación política de los movimientos sociales que organizan y orientan los reclamos de un vasto sector de las clases populares. Lo que impulsa la incorporación de estos trabajadores es la aspiración legítima a disponer de un ingreso regular, estabilidad laboral y protección social. En suma, a lo que en Argentina se configura como un estatus de “ciudadanía social”, un trabajo con derechos y garantías equivalente al que disponen los asalariados registrados en el sistema de seguridad social (Palomino y Dalle, 2022).

Efectos de la crisis sobre el trabajo, los ingresos y el consumo desde una perspectiva de clases

Efectos en las condiciones laborales

Desde una perspectiva de análisis de clase, ¿quiénes fueron los más afectados en sus condiciones de trabajo e ingresos? En la encuesta ESAyPP / PISAC-COVID-19 se diseñó una sección específica con una batería amplia de indicadores sobre cómo impactó la pandemia en el trabajo, dividiendo dichos indicadores entre trabajadores asalariados y autónomos (patrones y cuenta propia). Entre los indicadores construidos se destacan “despidos”, “cierre de negocios”, “caída del salario o ingreso”, “suspensiones con caída de salario”, “disminución de las ventas y los clientes”, “cambio a modalidad teletrabajo o mixta”, “suspensiones o reducción de horas sin pérdida de salario”, “reconversión del negocio o actividad”, “mantuvo el trabajo, pero en otro sector”⁸.

Para indagar el efecto neto de la posición de clase social en relación a otros clivajes de desigualdad como el género y la región de residencia que en estudios previos sobre el impacto laboral de la emergencia socio-sanitaria se mostraban como relevantes, realizamos un análisis de regresión logística binaria multivariada.

Comenzamos el análisis realizando tres medidas resumen de los efectos de la pandemia en las condiciones laborales: 1. salida de la ocupación (despidos para asalariados y “cierre de negocio / no pudo salir a trabajar” para autónomos), 2. “Caída del salario / ingreso” y 3. Otros efectos, entre los que separamos para un tratamiento específico “el pasaje a teletrabajo” (Cuadro 1). Cada indicador sintetiza

⁸ Para cada indicador se realizaron dos preguntas, i. Si desde que comenzó la pandemia la persona encuestada experimentó dicho efecto, y ii. Si al momento de la encuesta (fines de 2021) continuaba en dicha situación, buscando de tal modo captar en qué medida el impacto más agudo del período inicial de la pandemia y las políticas sanitarias preventivas (ASPO y DISPO) sobre el empleo perduraban o se habían revertido.

las respuestas positivas en al menos una pregunta de la batería de preguntas correspondiente a cada dimensión.

Los resultados muestran que quienes experimentaron mayores efectos negativos en sus condiciones laborales fueron los trabajadores autónomos de clase media, –principalmente el segmento de la pequeña burguesía con escaso capital–, los autónomos del segmento informal de la clase trabajadora (cierre de negocio, comercio o taller; tuvo que dejar de trabajar en su oficio; caída de ventas y clientes, o disminución de los ingresos), y los asalariados no registrados también del segmento informal de la clase trabajadora (despidos, pérdida de salario y suspensiones con caída del salario). Conviene aquí hacer una aclaración, si bien los segmentos autónomos de clases medias tuvieron en términos generales mayores chances de haber sufrido un impacto negativo en sus condiciones laborales, los efectos más graves de la pandemia se produjeron en el segmento informal de la clase trabajadora –que, como vimos antes, constituye la base social de la Economía Popular–. Esto se observó tanto en los asalariados no registrados, que en general trabajan en pequeños establecimientos y fueron más vulnerables a los despidos, como en los cuentapropistas de baja calificación (tipo changas) que por las medidas de aislamiento preventivas tuvieron muchas limitaciones para poder trabajar en las calles.

Los asalariados registrados, por su parte, fueron menos afectados en sus condiciones laborales y, en particular, estuvieron menos expuestos a la pérdida de empleos, aunque sufrieron impactos negativos que fueron diferenciales según el carácter socio-ocupacional y la calificación. En particular, los asalariados formales de la producción y circulación experimentaron en mayor medida disminuciones del salario, suspensiones y reducciones de horas con reducción de salario que los trabajadores administrativos y de servicios sociales, estos últimos de amplia inserción en el sector público y con pautas más cercanas a los grupos ocupacionales de clases medias asalariadas. El primer grupo, tradicionalmente vinculado al núcleo de la clase obrera, fue declarado “esencial” y por lo tanto

se expusieron más al contagio de COVID-19 durante la primera etapa de la pandemia.

En relación con los cambios en las condiciones laborales que no implicaron pérdida del empleo o caída del ingreso/salario, el principal efecto entre los grupos ocupacionales autónomos de clases medias fue la reconversión del trabajo en el mismo rubro, siendo los de mayor capital quienes tuvieron mayores posibilidades en ese sentido. Entre los grupos ocupacionales asalariados formales, el efecto más relevante fue el paso a la modalidad teletrabajo o mixta, que se acentúa en los asalariados de mayor jerarquía tanto en términos de calificación como de autoridad. La transición al teletrabajo también fue muy alta en la pequeña burguesía profesional (Benza et al., 2022).

La transición al teletrabajo fue mayor en las mujeres por su mayor inserción en empleos técnico-profesionales u operativos en la administración y en la educación. Esta transición al teletrabajo, si bien en términos comparativos supuso una mayor estabilidad laboral y cierta ventaja o privilegio frente a otras consecuencias de la pandemia, al mismo tiempo implicó procesos de precarización laboral: la extensión de la jornada de trabajo, el incremento de gastos por el uso de servicios básicos en el hogar, y una sobrecarga y superposición con el trabajo de cuidados (Boniolo y Estévez Leston, 2022).

Cuadro 1. Regresión logística binaria de efectos en las condiciones laborales según posición de clase, sexo y región de residencia. Población económicamente activa mayor de 18 años. Argentina urbana, 2021 (n= 3079)

| Variables independientes | Salida de la ocupación | Caída salario / ingresos | Teletrabajo / modalidad mixta |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Clase social y segmento de clase | | | |
| Empresarios | 2,082 | 3,342* | 1,241 |
| Directivos / gerentes nivel alto | 0,010*** | 0,21 | 27,654*** |
| Posiciones de clase media / intermedias o contradictorias | | | |
| <i>Capas superiores</i> | | | |
| Pequeños empleadores (5-9) y profesionales autónomos | 2,932*** | 1,914* | 8,749*** |
| Directivos y profesionales asalariados | 0,180*** | 0,224*** | 17,657*** |
| <i>Capas inferiores</i> | | | |
| Jefes, supervisores y técnicos asalariados | 0,195*** | 0,411*** | 13,287*** |
| Pequeños empl. (1-4) cuentaprop. con escaso capital | 2,884*** | 2,065*** | 2,620*** |
| Clase trabajadora formal | | | |
| Empleados/as de rutina formales | 0,167*** | 0,161*** | 8,049*** |
| Asalariados de baja calificación formales | 0,345*** | 0,497** | 2,578*** |
| Clase trabajadora informal | | | |
| Asalariados de baja calificación informales | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Trabajadores cuentaprop. con oficio sin capital y tipo changas | 3,840*** | 2,552*** | 0,256* |
| Sexo (Ref. varones) | | | |
| Varones | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Mujeres | 0,982 | 1,018 | 1,842*** |
| Región (Ref. AMBA) | | | |
| AMBA | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Pampeana | 0,805 | 0,912 | 1,266 |
| Centro | 0,597** | 0,790* | 1,213 |
| Cuyo | 1,001** | 1,036 | 1,575* |
| NOA | 0,901 | 1,159 | 1,689** |
| NEA | 0,369** | 0,850 | 0,888 |
| Patagonia | 0,695 | 1,136 | 1,163 |
| Chi ² | 455,8*** | 424,5*** | 621,9*** |
| Grados de libertad | 16 | 16 | 16 |
| R cuadrado de Nagelkerke | 0,239 | 0,180 | 0,285 |

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta ESAyPP / PISAC-COVID-19 (2021).

Fueron extraídos de la base 32 casos (1 %) de perceptores de planes de empleo (Potenciar trabajo) y 103 casos de desempleados de larga duración (3,2 %) (con más de 1 año en esa condición). El primer grupo fue sacado de la base porque su condición laboral no se rigió por los mecanismos que regulan el mercado de trabajo. El segundo grupo no tenía empleo desde fines de 2019.

Políticas públicas e ingresos durante la pandemia

Frente a la crisis de la pandemia el Estado nacional amplió o reforzó políticas ya existentes e implementó otras nuevas con el fin de mitigar sus efectos en materia laboral y social. De un lado, diversas medidas buscaron sostener las relaciones laborales formales, entre las que destacan muy especialmente la prohibición de los despidos y los subsidios a las nóminas salariales de empresas privadas a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción [ATP], que llegó a financiar hasta un 50 % de los salarios netos de los trabajadores. Por otro lado, se aplicaron medidas para brindar seguridad económica a los hogares y personas de muy bajos ingresos y de la economía informal. En esta línea, se aplicó un bono extra para jubilaciones y pensiones, y se reforzaron y extendieron programas preexistentes, como la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y la provisión de alimentos a hogares y comedores. Asimismo, se implementó el Ingreso Familiar de Emergencia [IFE], un programa de transferencias de ingresos a familias con integrantes en la economía informal y desempleados que, si bien acotado en el tiempo, tuvo una magnitud inédita al alcanzar casi 9 millones de beneficiarios. A estas políticas del Gobierno Nacional, se sumaron todo un conjunto de medidas implementadas por los Gobiernos subnacionales (Díaz Langou et al., 2021; RIPPSON, 2020).

Si bien las políticas desplegadas por el Estado estuvieron lejos de revertir los efectos de la crisis, permitieron contener la pérdida de puestos de trabajo formales y, en menor medida, atenuar la caída en el bienestar material de los hogares, como han mostrado diversos estudios (Maceira, 2021; Díaz Langou et al., 2020). Ahora bien, ¿qué clases y segmentos de clase fueron alcanzados por estas medidas a lo largo del territorio del país? Los datos de la encuesta ESAyPP, que ponen el foco sobre las que fueron las dos principales medidas aplicadas en esta etapa, el IFE y el salario complementario por el programa ATP, brindan indicios en ese sentido (Cuadro 2).

El IFE se concentró en los desocupados y en la clase trabajadora informal, en ambos casos una cobertura mayor al 40 % (42 % y 45 %, respectivamente). No obstante, también alcanzó a parte de las clases intermedias: el porcentaje de beneficiarios fue muy elevado entre los trabajadores autónomos con poco nivel de capitalización (39 %), que como vimos en la sección anterior, fue uno de los grupos más golpeados en sus condiciones laborales durante la pandemia. Estas mismas pautas se repiten a lo largo del país, si bien con diferencias en intensidad en función del alcance que tuvo el IFE en las distintas regiones. En particular, en el NEA y el NOA –que por sus altos niveles de informalidad y pobreza tuvieron una mayor cobertura del IFE dados los requisitos de acceso–, el porcentaje de desocupados que recibió el programa supera al registrado para el promedio del país (44 % y 68 %, respectivamente), y lo mismo sucede entre los trabajadores informales (56 % y 52 %) y los autónomos de clase media con bajo nivel de capitalización (44 % y 47 %).

Cuadro 2. Porcentaje de personas que recibió el Ingreso Familiar de Emergencia o el salario complementario por ATP según posición de clase, Argentina urbana (2021)

| | IFE | ATP |
|--|------|------|
| Empresarios y directivos de nivel alto | 13,9 | 0,4 |
| Posiciones de clase media / intermedias o contradictorias | 20,7 | 7,3 |
| <i>Capas superiores</i> | 6,4 | 7,7 |
| Peq. empleadores y ctaprop. profesionales | 8,0 | 0,0 |
| Directivos medios y asalariados profesionales | 5,5 | 12,3 |
| <i>Capas inferiores</i> | 24,5 | 7,2 |
| Jefes intermedios y asalariados de calif. técnica | 13,7 | 11,4 |
| Peq. empleadores y ctaprop. de calif. técnica y operativos con capital | 38,9 | 1,5 |
| Clase trabajadora | 31,3 | 5,6 |
| <i>Clase trabajadora formal</i> | 9,3 | 11,9 |
| Asalariados formales administ. y de los serv. soc., baja calificación | 4,0 | 7,7 |
| Asalariados formales de la prod. y circulación, baja calificación | 12,2 | 14,2 |
| <i>Clase trabajadora informal</i> | 44,6 | 1,8 |
| Cuentapropistas operativos sin capital | 40,5 | 3,6 |

| | IFE | ATP |
|--|-------------|------------|
| Asalariados no formales de baja calificación | 45,0 | 1,8 |
| Trabajadoras en casas particulares | 42,3 | 2,8 |
| Ctapropistas de baja calificación y tipo changas | 44,9 | 0,7 |
| Perceptores de planes de empleo | 56,7 | 0,0 |
| Desocupados | 41,6 | 1,2 |
| Inactivos | 15,8 | 0,4 |

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta ESAyPP / PISAC-COVID-19 (2021).

En contraste, los principales beneficiarios del salario complementario por el ATP fueron la clase trabajadora formal (12 %), en particular los que se desempeñan en la producción y circulación (14 %), así como los segmentos de la clase media asalariada, los profesionales (12 %) y los técnicos (11 %), entre los cuales es alta la proporción que se desempeña bajo relaciones laborales formales. Estos resultados también se repiten en todas las regiones del país, y se presentan en forma algo más acentuada en aquellas regiones en las que el impacto del ATP fue mayor, en particular el GBA y la Patagonia, donde el nivel del empleo asalariado registrado en la seguridad social es mayor y donde sus actividades productivas predominantes registraron importantes efectos directos e indirectos durante la pandemia. Un punto que es importante destacar es que la encuesta indagó por las personas que fueron beneficiarias del ATP al recibir salarios complementarios, pero no por las empresas o actividades beneficiarias. En este sentido, es probable que el complemento del mayor alcance del programa entre trabajadores formales sea una cobertura también más elevada entre los empleadores de sectores medios y, fundamentalmente, de clase alta.

La ampliación de la intervención del Estado en un contexto de pérdida de empleos y caída de los ingresos laborales dio lugar a modificaciones en el peso del mercado y del Estado en la resolución del bienestar material de los hogares. Esto queda reflejado en la evolución de las fuentes de ingresos de los hogares durante la pandemia.

De acuerdo con datos de la EPH, entre el último trimestre de 2019 y el primero de 2020 –el momento de mayor impacto de la pandemia– el porcentaje de hogares que recibía ingresos por fuentes laborales se redujo de 80 % a 73 %, mientras que aquellos que recibían ingresos por transferencias públicas aumentaron de 15 % a 25 %. Esta situación, sin embargo, se fue revirtiendo a medida que el mercado laboral comenzó a recomponerse y la ayuda estatal menguó, y hacia fines de 2021 el porcentaje de hogares con ingresos laborales y con transferencias públicas volvió a ser similar al de antes de la pandemia (Benza y Arancio, 2022).

Sin embargo, hay diferencias destacables en las fuentes de ingresos de los hogares, en particular en lo referido a la extensión de las rentas y transferencias públicas. Los datos de la encuesta ESAyPP (Benza et al., 2022) muestran que, si bien los hogares que reciben ingresos de rentas como alquileres, inversiones o intereses son muy pocos, su número es más elevado entre las posiciones de clase alta y clase media. Por su parte, las transferencias públicas se concentran en los hogares de la clase trabajadora informal (35 % y 36 %, frente a 15,6 % para el total de los hogares). Entre estas transferencias, destaca especialmente la alta incidencia de la Asignación Universal por Hijo (percibida por el 28 % de los hogares del segmento), así como de las ayudas alimentarias mediante la Tarjeta Alimentar (20 %), dos programas que ya tenían una cobertura importante y que como mencionamos fueron ampliados frente a la crisis de la pandemia. En contraste, el peso de las transferencias públicas es reducido en el segmento formal de la clase trabajadora (10 %), así como en las clases medias (9 %), si bien dentro del segmento autónomo con poco capital de ese sector social hay un porcentaje considerable que también recibe transferencias públicas (14 %).

En suma, durante la pandemia, en un contexto en que la posibilidad de obtener recursos mediante el mercado laboral se vio seriamente afectada, el papel del Estado adquirió más relevancia en la reproducción material de la población. La acción del Estado se desplegó a lo largo de diferentes posiciones en la estructura social.

No obstante, hay que advertir que este mayor peso del Estado en el bienestar material de la población no implicó, necesariamente, que la ayuda haya sido de igual magnitud, ni igualmente efectiva. En tanto las políticas estatales, en particular el IFE y el ATP, fueron distintas en términos de la cantidad y tipo de beneficiarios, pero también en relación con los presupuestos involucrados y su continuidad en el tiempo –siendo mayor en el caso del ATP–, el volumen de las transferencias estatales recibidas por las distintas clases fue desigual, un punto que sin embargo queda por profundizar⁹.

Transformaciones en el consumo de los hogares

La caída de ingresos que se registró durante la pandemia afectó fuertemente la capacidad de consumo de los hogares: el 41 % de los encuestados por la ESAyPP manifestó que los ingresos de sus hogares no alcanzaron para cubrir sus gastos cotidianos durante 2020. Del resto, 44 % manifestó que sus ingresos sí alcanzaron para cubrir sus gastos, en tanto 15 % no solo pudo cubrir sus gastos, sino también ahorrar.

La dificultad para cubrir los gastos cotidianos del hogar durante el primer año de la pandemia estuvo presente a lo largo del país, pero fue algo más frecuente en algunas regiones, en Gran Buenos Aires (46 %), Cuyo (46 %), Noreste (45 %) y Noroeste (43 %), y menos frecuente en la Región Pampeana (39 %), el Centro (36 %), y en especial, la Patagonia (28 %). A su vez, en todas las regiones hubo diferencias pronunciadas en función de la situación del principal sostén del hogar. Los datos para el promedio del país muestran que, como era esperable, los hogares que se vieron más afectados fueron aquellos con

⁹ En esta línea, estimaciones de Salomón (2020) referidas específicamente al IFE y el ATP muestran que en los primeros meses de 2020, mientras una pareja con hijas/os que trabajaba en relación de dependencia para un empleador pudo haber percibido hasta un máximo de alrededor \$ 67 500 mensuales por ATP, una pareja con hijas/os que trabaja en la informalidad pudo recibir un máximo de \$ 10 000 mensuales por el IFE.

el principal sostén desocupado: en promedio, 71 % manifestó que sus ingresos fueron insuficientes. Sin embargo, la falta de ingresos para los gastos cotidianos afectó también a aquellos hogares con el principal sostén ocupado. Particularmente, a los de clase trabajadora informal (60 % en promedio) y, en menor medida, a los de clase trabajadora formal (35 %) y los de la clase media inferior (32 %) (Benza et al., 2022). Además de la variable de posición de clase social, Sautu y Carrascosa (2022) mostraron que el impacto de la pandemia en los ingresos de los hogares fue mayor en aquellos con alta tasa de dependencia y donde el principal sostén son mujeres.

En este marco, casi la mitad de los hogares del país, 46 %, manifestó que durante la pandemia debió recurrir a ayuda económica extra para poder afrontar sus gastos: principalmente al uso de ahorros propios (26 %) o a la ayuda de familiares (24 %), pero también a la ayuda de amigos (9 %), a créditos de bancos (6 %) o de prestamistas particulares (4 %). La necesidad de recurrir a ayuda económica extra fue más frecuente entre los hogares con el principal sostén desocupado (54 %), entre los de clase trabajadora informal (54 %) y entre los grupos autónomos de clase media: los pequeños empleadores y cuentapropistas con escaso capital (55 %) y profesionales (50 %). A su vez, las estrategias que fueron más frecuentes difieren de acuerdo al sector social, siguiendo pautas que repiten lo observado en crisis anteriores a la aquí estudiada: en particular, el acceso a créditos informales, por medio de prestamistas personales o el endeudamiento en el medio familiar, fue más frecuente entre los hogares del mundo popular, mientras entre los sectores más aventajados fue más frecuente el uso de ahorros y de préstamos por mecanismos formales (Gutiérrez et al., 2022).

¿Cuáles fueron los principales gastos que se restringieron durante la pandemia? Sin dudas, la expresión más aguda de la falta de recursos que experimentaron los hogares fue la incapacidad para cubrir los gastos de alimentación: en 2020, en 14 % de los hogares del país se comió menos o se dejó de comer en el desayuno, almuerzo o cena por falta de recursos para alimentos, y en 5 % de los hogares

esta restricción afectó incluso la alimentación de niños y niñas. Adicionalmente, 32 % de los hogares debió dejar de pagar o refinanciar gastos de otro tipo, entre ellos, servicios básicos, servicios de internet o telefonía, alquiler, tarjetas de crédito, cuotas de colegios o de servicios médicos privados e, incluso, tratamientos médicos.

Estos porcentajes, sin embargo, nuevamente promedian situaciones heterogéneas entre regiones y, sobre todo, entre segmentos y clases sociales. De un lado, la falta de alimentos fue más acentuada en las regiones que acumulan déficits estructurales, el Noreste (19 %), Noroeste (18 %) y Gran Buenos Aires (18 %), mientras los recortes de otro tipo de gastos fueron también más pronunciados en Noreste (36 %) y Noroeste (38 %), y en Cuyo (36 %). En cuanto al impacto diferencial en segmentos y clases, las restricciones se concentraron fuertemente en los segmentos más desaventajados de la estructura social: en los hogares con el principal sostén desocupado, y entre aquellos de clase trabajadora informal, en particular los de cuenta-propistas informales, de calificación operativa sin capital y los no calificados (Cuadro 3).

Sin embargo, la falta de ingresos para cubrir los gastos esenciales no afectó a todos los hogares. Como mencionamos antes, hubo una minoría (15 %) que en esta etapa también pudo ahorrar. La capacidad de ahorro fue algo más frecuente en las regiones y sectores sociales que, como mencionamos antes, tuvieron un menor porcentaje de hogares con ingresos insuficientes durante la pandemia, en particular en la Patagonia (19 %) y, en términos de sectores sociales, muy especialmente en el estrato superior de la clase media (39 %). La heterogeneidad de situaciones en relación con los ingresos se vio reflejada también en los gastos. Mientras muchos hogares vieron restringidos sus consumos esenciales, un grupo reducido, que se concentró en las mismas regiones y, sobre todo, en los mismos sectores que mostraron mayor capacidad de ahorro, pudo realizar gastos extras. Entre ellos, está la compra de computadoras de escritorio o *notebooks*, lo que puede enmarcarse en las nuevas necesidades que impuso la pandemia frente a la extensión de modalidades virtuales en el trabajo

y en la educación, pero también la compra de autos, la suscripción a plataformas pagas para películas y series, la compra de viajes o paquetes turísticos, o gastos vinculados con la decisión de mudarse durante una temporada de la pandemia a una casa (de alquiler o propia) en una quinta o barrio privado (Benza et al., 2022).

Cuadro 3. Porcentaje de hogares en los que adultos o niñas/os dejaron de comer en el desayuno, almuerzo o cena por falta de recursos y que dejaron de pagar o refinanciaron gastos esenciales durante 2020, según posición de clase. Argentina urbana, 2021

| | Comieron menos o dejaron de comer por falta de recursos | | | Dejaron de pagar o refinanciaron otros gastos esenciales* |
|--|---|------------|---------------|---|
| | Adultos | Niñas/os | Total hogares | |
| Empresarios y directivos de nivel alto | 4,3 | 5,2 | 5,6 | 22,7 |
| Posiciones de clase media / intermedias o contradictorias | 7,7 | 2,4 | 8,0 | 31,2 |
| Capas superiores | 2,8 | 0,2 | 2,8 | 21,5 |
| Peq. empleadores y ctaprop. profesionales | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 29,8 |
| Directivos medios y asalariados profesionales | 3,7 | 0,4 | 3,7 | 16,3 |
| Capas inferiores | 8,9 | 2,9 | 9,3 | 33,7 |
| Jefes intermedios y asalariados de calif. técnica | 6,4 | 2,6 | 6,9 | 31,0 |
| Peq. empleadores y ctaprop. de calif. técnica y operativos con capital | 12,8 | 3,4 | 12,9 | 37,8 |
| Clase trabajadora | 17,8 | 6,6 | 18,2 | 38,0 |
| <i>Clase trabajadora formal</i> | 10,6 | 2,7 | 11,0 | 33,7 |
| Asalariados formales administ. y de los serv. soc., baja calificación | 8,6 | 2,1 | 9,4 | 32,4 |
| Asalariados formales de la prod. y circulación, baja calificación | 11,5 | 2,9 | 11,7 | 34,2 |
| <i>Clase trabajadora informal</i> | 24,1 | 10,1 | 24,5 | 41,7 |
| Cuentapropistas operativos sin capital | 29,2 | 9,0 | 29,2 | 47,9 |
| Asalariados no formales de baja calificación | 21,0 | 7,9 | 21,2 | 40,8 |
| Trabajadoras en casas particulares | 23,1 | 10,8 | 23,5 | 34,9 |

| | Comieron menos o dejaron de comer por falta de recursos | | | Dejaron de pagar o refinanciaron otros gastos esenciales* |
|--|---|------------|---------------|---|
| | Adultos | Niñas/os | Total hogares | |
| Ctaptopistas de baja calificación y tipo changas | 31,1 | 15,8 | 32,0 | 50,4 |
| Perceptores de planes de empleo | 11,6 | 7,3 | 16,7 | 17,7 |
| Desocupados | 36,6 | 17,1 | 36,6 | 38,8 |
| Inactivos | 11,6 | 3,5 | 11,9 | 20,5 |
| Total | 13,8 | 5,0 | 14,1 | 32,2 |

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta ESAyPP / PISAC-COVID-19 (2021).

La doble crisis en la estructura de clases de los hogares

En la línea de la hipótesis de trabajo presentada, la investigación logró establecer que la estructura social argentina sufrió efectos combinados y acumulativos de lo que definimos como una doble crisis, de distinto origen y con distinta orientación de la intervención del Estado: la primera durante la gestión de la alianza Cambiemos y la segunda durante la pandemia (Benza et al., 2022).

La primera crisis (2016-2019), caracterizada por una reinstalación del patrón de valorización financiera con una orientación estatal neoliberal, impactó especialmente en la clase trabajadora formal, con una pérdida de su significación relativa en la estructura, involucrando especialmente a los hogares del asalariado de la producción y la circulación. En esa dirección, produjo mayor polarización, debilitamiento de las zonas centrales de la estructura social y crecimiento tanto de los hogares con jefes/as desempleados como de los segmentos sin seguridad social de la clase trabajadora y de los sectores intermedios, esto es, los trabajadores informales y la pequeña burguesía pobre (Cuadro 4).

Estos cambios se dieron con un aumento de la desigualdad de ingresos entre los hogares de distinta posición social, especialmente entre aquellos de la clase trabajadora formal y los del empresariado

y del estrato superior de los sectores medios, con una magnitud que supuso en pocos años un retroceso de una década en términos de las tendencias anteriores (Benza et al., 2022).

La segunda crisis, disparada por la pandemia COVID-19, se caracterizó por una restricción de la actividad económica de niveles inéditos como efecto de las políticas sanitarias protectoras de la salud de la población, e intentó ser amortiguada por una intervención estatal orientada a sostener el empleo y mitigar el impacto en las condiciones de vida. La política laboral tuvo efectos positivos para la clase trabajadora formal, cuyos jefes/as de hogar lograron retener sus empleos en niveles similares a períodos anteriores. En esa dirección, los segmentos más impactados por la pandemia fueron los hogares de la clase trabajadora informal, especialmente aquellos con jefes/as asalariados/as no registrados/as (entre ellos/as las trabajadoras en casas particulares) y, entre los sectores medios, los hogares encabezados por autónomos o microempresarios de calificaciones técnicas.

En términos de las posiciones de clase de los hogares, la coyuntura post pandemia se caracteriza por un restablecimiento del peso relativo de las clases y estratos en la zona intermedia de la estructura, en particular del segmento superior de la pequeña burguesía y de los segmentos asalariados de las posiciones intermedias inferiores y de la clase trabajadora formal. Junto con ello, se destaca la retracción de los segmentos más desaventajados de la clase trabajadora informal (las trabajadoras en casas particulares y el cuentapropismo de bajas calificaciones y de subsistencia). A nivel nacional entonces, estos comportamientos sugieren una tendencia hacia el restablecimiento de las zonas centrales de la estructura social que habían sido las más fuertemente erosionadas durante la etapa previa (Cuadro 4).

Cuadro 4. Distribución de los hogares según posición de clase social del jefe/a de hogar. Argentina, total de aglomerados urbanos. Evolución 2003-2021, Años seleccionados

| Posición de clase del jefe/a de hogar | 2003 | 2006 | 2010 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Empresarios y directivos de nivel alto | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| Posiciones de clase media / intermedias o contradictorias | | | | | | | |
| <i>Capas superiores</i> | | | | | | | |
| Pequeños empleadores y autónomos profesionales | 2,7 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
| Directivos medios y asalariados profesionales | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 6,0 | 5,8 | 7,5 | 6,7 |
| <i>Capas inferiores</i> | | | | | | | |
| Jefes intermedios y asalariados técnicos | 12,2 | 12,2 | 13,7 | 12,2 | 14,2 | 13,2 | 15,5 |
| Pequeños empleadores no profesionales y autónomos de calificación técnica | 5,2 | 4,9 | 6,1 | 6,2 | 5,4 | 6,5 | 5,7 |
| Autónomos operativos capitalizados | 8,8 | 9,3 | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 10,4 | 10,5 |
| Clase trabajadora | 66,6 | 65,1 | 61,9 | 63,2 | 60,4 | 58,7 | 57,9 |
| Clase trabajadora formal | 24,1 | 28,9 | 32,9 | 34,0 | 30,8 | 26,7 | 28,7 |
| Asalariados formales administrativos y de los servicios sociales, registrados y de bajas calificaciones | 6,8 | 8,5 | 9,0 | 10,1 | 9,9 | 8,4 | 9,9 |
| Asalariados formales de la producción y la circulación de baja calificación | 17,4 | 20,4 | 23,8 | 23,9 | 21,0 | 18,4 | 18,9 |
| Clase trabajadora informal o precarizada | 38,9 | 34,6 | 27,5 | 27,8 | 28,2 | 29,6 | 27,0 |
| Asalariados no formales de baja calificación | 15,5 | 16,0 | 12,9 | 12,2 | 11,9 | 12,0 | 11,6 |
| Trabajadoras en casas particulares | 4,3 | 5,2 | 4,8 | 5,7 | 6,6 | 6,2 | 5,0 |
| Autónomos de bajas calificaciones no capitalizados | 10,2 | 10,3 | 7,7 | 7,5 | 8,1 | 8,3 | 7,5 |
| Trabajadores en programas de empleo | 5,4 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| Trabajadores abiertamente excedentes (Desocupados de larga duración) | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 2,4 | 2,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: elaboración propia con base en EPH-INDEC

En relación con los ingresos, la comparación 2019-2021 muestra un achicamiento de las brechas en los ingresos per cápita familiar de los hogares captados por la encuesta, entre las posiciones intermedias (particularmente los cuadros profesionales y directivos y la pequeña burguesía) y la clase trabajadora formal, así como al interior de esta última, entre los hogares del asalariado de “cuello blanco” y los

hogares del asalariado de “cuello azul” de la producción y la circulación (Benza et al., 2022). Se trata de observaciones puntuales entre coyunturas, cuestión que advierte sobre la pertinencia de una consideración de más largo plazo que permita definir tendencias. A su vez, la información provista por otras fuentes secundarias permite matizar fuertemente la interpretación de estos resultados, al poner como marco general de análisis la relación entre los ingresos de los hogares y el excedente total generado en el período. En efecto, el análisis distributivo con base en el sistema de Cuentas Nacionales (Dalle y Palomino, 2022) estima que la participación del conjunto de los trabajadores en el valor agregado se redujo en forma significativa durante la primera crisis (de 52 % en 2016 a 46 % en 2019), y volvió a experimentar una nueva reducción tras la salida de la pandemia, durante la recuperación económica de 2021 (43 %). En otras palabras, las posibilidades de apropiación de excedente por parte de las posiciones del capital (cuyos hogares y fuentes de ingreso y riqueza no son captadas por encuestas y requieren otro tipo de metodología) han crecido durante la doble crisis y a la salida de la pandemia.

Asimismo, nuestro estudio muestra que estos movimientos se dieron en el marco de un deterioro en el bienestar material de los hogares captados vía encuestas (Cuadro 5). A fines de 2021 los ingresos reales de los hogares del país son, en promedio, 16 % más bajos que en 2016. Esta caída en la capacidad adquisitiva es el resultado de la gran pérdida de ingresos ocurrida durante la crisis de la pandemia, pero también de lo sucedido durante la crisis de la pre pandemia. Entre 2016 y 2019 los hogares sufrieron, en promedio, una pérdida del 10 % de sus ingresos reales. Si bien esta pérdida fue generalizada, afectó muy especialmente a los asalariados de la clase trabajadora. La pandemia se montó sobre este escenario ya crítico agudizando la pérdida de bienestar de los hogares. Entre 2019 y 2020 sus ingresos reales cayeron, en promedio, 21 %. La reactivación de la actividad económica fue acompañada por una mejora de los ingresos que, sin embargo, fue tenue (6 % en promedio), lo que explica que el saldo de la doble crisis sea la reducción en el poder adquisitivo antes mencionada. En este proceso, destaca

la heterogeneidad de resultados que se observa dentro de la clase trabajadora. Los hogares encabezados por los asalariados formales de la producción y la circulación, que entre 2020 y 2021 crecieron más, fueron también uno de los grupos que experimentaron la mayor recuperación en sus ingresos (17 %). En contraste, en el resto de los segmentos de la clase trabajadora tanto formal como informal, no se registraron mejoras en los ingresos o estas fueron muy leves.

Cuadro 5. Ingreso per cápita familiar promedio de los hogares en valores reales según posición del jefe de hogar. Argentina, total de aglomerados urbanos. 2016, 2019 y 2021

| Posición del jefe de hogar | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Empresarios y directivos de nivel alto | 100,0 | 82,2 | 59,6 | 80,2 |
| Posiciones de clase media /intermedias o contradictorias | | | | |
| Peq. empleadores y autónomos profesionales | 100,0 | 86,2 | 68,1 | 65,4 |
| Directivos medios y asalariados profesionales | 100,0 | 96,0 | 78,2 | 80,7 |
| Jefes intermedios y asalariados técnicos | 100,0 | 93,1 | 90,1 | 89,0 |
| Peq. empleadores no profesionales y autónomos de calif. técnica | 100,0 | 94,7 | 78,2 | 79,8 |
| Autónomos operativos capitalizados | 100,0 | 84,7 | 85,5 | 87,7 |
| Clase trabajadora | 100,0 | 85,4 | 75,0 | 82,2 |
| Clase trabajadora formal | 100,0 | 83,4 | 73,4 | 80,3 |
| Asalariados formales administ. y de los serv. soc., baja calificación | 100,0 | 79,0 | 75,1 | 72,1 |
| Asalariados formales de la prod. y circulación, baja calificación | 100,0 | 86,2 | 71,8 | 84,3 |
| Clase trabajadora informal | 100,0 | 93,7 | 78,4 | 83,9 |
| Asalariados no formales de baja calificación | 100,0 | 86,2 | 77,2 | 78,8 |
| Trabajadoras en casas particulares | 100,0 | 96,2 | 73,6 | 85,9 |
| Autónomos de bajas calificaciones no capitalizados | 100,0 | 90,5 | 83,7 | 78,3 |
| Trabajadores en programas de empleo | 100,0 | 76,6 | 83,3 | 59,3 |
| Trabajadores abiertamente excedentes (Desocup. de larga duración) | 100,0 | 67,6 | 79,0 | 64,8 |
| Total | 100,0 | 89,9 | 78,9 | 83,8 |

Fuente: elaboración propia con base en EPH-INDEC.

Disparidades regionales

La evolución de la estructura social que esquematizamos en párrafos anteriores, es una mirada global sobre el territorio nacional. En esta sección, consideramos brevemente la heterogeneidad entre regiones, así como el impacto diferencial de la doble crisis en las mismas.

Repongamos en primer lugar que en términos generales las regiones centrales del país, esto es, el Área Metropolitana, la Región Pampeana y Cuyo, muestran perfiles semejantes en la estructura de estratificación de clases, aún con sesgos importantes. El Área Metropolitana de Buenos Aires [AMBA] es el espacio socio-territorial de peso demográfico decisivo y se caracteriza por una asalarización algo mayor que el promedio nacional urbano, un peso mucho más importante del empleo privado y, en términos de sectores, mayor desarrollo de la industria manufacturera y los servicios financieros e inmobiliarios. Dado su señalado peso demográfico define los promedios de la estructura social nacional urbana que ya observamos. Asimismo, en tanto aglomerado sede de la Capital muestra un peso más importante de los hogares de los directivos y empresarios, pero también de aquellos encabezados por la pequeña burguesía (Cuadro 6).

Por su parte, la aquí llamada Región Pampeana según propuesta del SEN (que incluye la zona Centro del país del PISAC) y la Región Cuyo presentan niveles más bajos de asalarización y un peso intermedio tanto del empleo público como de la ocupación industrial (mayor que el resto del país y menor que el AMBA) junto a un peso importante de la construcción. Mientras la Región Pampeana tiene mayor despliegue de los servicios financieros e inmobiliarios, Cuyo se caracteriza por la ocupación en actividades primarias y el comercio y transporte. Respecto de sus respectivas estructuras sociales, en ambas regiones destaca el peso de los hogares de la llamada pequeña burguesía (esto es los empleadores de pequeño porte y los autónomos de altas calificaciones), y particularmente de la pequeña burguesía pobre (esto es los autónomos con pequeños capitales). Cuyo presenta además una significación de los hogares del gran

empresariado similar al AMBA, mientras que la Región Pampeana tiene similar presencia de los hogares de clase trabajadora formal.

Las regiones del Norte Grande, se caracterizan por una tasa de asalarización similar al promedio urbano (aunque con mayor porcentaje de empleo asalariado no registrado), un alto empleo estatal y, en contraposición a las áreas centrales, bajo desarrollo de la ocupación manufacturera y de los servicios modernos. En términos de estructura social, sus rasgos distintivos son la presencia más significativa de los hogares de los segmentos más desaventajados: la clase trabajadora informal (especialmente en el NOA), los beneficiarios de programas de empleo y la pequeña burguesía pobre. Finalmente, la Región Patagónica se caracteriza por la centralidad del Estado como articulador de las relaciones sociales. En esa dirección, presenta justamente importante peso del empleo público y la tasa de asalarización más alta, así como destacada participación de la administración pública y los servicios sociales en el empleo sectorial, además ciertamente de la actividad primaria que le es distintiva. Estas condiciones definen rasgos excepcionales de la estructura social patagónica: significación extraordinaria de la clase trabajadora formal, fuerte presencia de los sectores intermedios asalariados, y muy baja de la pequeña burguesía y de la clase trabajadora informal.

Cuadro 6. Distribución de los hogares según posición de clase social del jefe(a) de hogar por región. Argentina, total de aglomerados urbanos, 2016, 2019 y 2021

| Posición del jefe del hogar | CBA | | | Pampeana | | | CUYO | | | Patagonia | | | NOA | | | NEA | | |
|---|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2019 | 2021 | 2016 | 2019 | 2021 | 2016 | 2019 | 2021 | 2016 | 2019 | 2021 | 2016 | 2019 | 2021 | 2016 | 2019 | 2021 |
| Empresarios y directivos nivel alto | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 2,2 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 0,9 | 0,8 |
| Posiciones de clase media/intermedias o contradictorias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peq. empleadores y autónomos profesionales y técnicos | 8,8 | 10,5 | 9,1 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 11,7 | 9,1 | 4,0 | 5,8 | 6,0 | 7,9 | 8,4 | 9,8 | 7,1 | 8,6 | 8,2 |
| Directores, jefes y asal. profesionales y técnicos | 20,1 | 21,2 | 23,9 | 19,5 | 20,7 | 20,7 | 20,0 | 18,7 | 19,1 | 21,9 | 22,3 | 21,1 | 20,6 | 19,8 | 18,7 | 19,6 | 18,5 | 19,8 |
| Autónomos operativos capitalizados | 8,1 | 10,0 | 9,7 | 11,7 | 11,3 | 11,9 | 12,2 | 11,8 | 11,2 | 9,6 | 8,7 | 9,5 | 9,3 | 9,8 | 10,6 | 9,1 | 11,5 | 12,8 |
| Clase trabajadora | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clase trabajadora formal | 30,4 | 25,2 | 28,4 | 30,0 | 26,9 | 28,6 | 28,5 | 27,0 | 28,7 | 45,6 | 43,2 | 40,3 | 28,9 | 26,1 | 25,4 | 34,2 | 32,5 | 27,7 |
| Clase trabajadora informal | 27,6 | 26,9 | 22,9 | 25,0 | 26,1 | 23,7 | 24,9 | 25,2 | 26,3 | 14,4 | 15,3 | 19,3 | 29,8 | 31,6 | 31,6 | 27,4 | 25,8 | 26,8 |
| Beneficiarios programas empleo | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1,9 | 2,0 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 2,3 |
| Desocupados de larga duración | 1,4 | 2,9 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 2,3 | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 1,2 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fuente: elaboración propia con base en EPH-INDEC.

Señalamos párrafos antes que la reinstalación del patrón de valorización financiera durante el período 2016-2019 impactó a nivel nacional, fundamentalmente en la clase trabajadora formal. Este efecto recorre todas las regiones, aunque fue más importante en el AMBA y, en segundo lugar, en la Región Pampeana y el NOA. Por su parte, mientras en todas las regiones crecieron en contraposición los hogares del proletariado informal, la tendencia fue contraria especialmente en el NEA (con una caída de más de seis puntos) y en el AMBA. En estas regiones, el efecto compensatorio frente al desgranamiento de la clase trabajadora formal supuso el aumento de la pequeña burguesía pobre (especialmente en el AMBA y en menor medida en el NEA).

Si la primera crisis tuvo efectos de distinta intensidad, pero con una misma orientación a lo largo del país, la evolución de las estructuras regionales hacia la salida de la pandemia es dispar. En efecto, señalamos antes que, para el total urbano nacional se observa en términos generales y hacia el 2021 un restablecimiento del orden de magnitud de las distintas clases y estratos a nivel de la estructura social. Esto no se corrobora para todas las regiones. Al respecto, la recuperación de la clase trabajadora formal es significativa solamente para el AMBA (que define el promedio urbano), mientras que en el NOA y especialmente en la Patagonia y el NEA, se pronuncia su pérdida de significación relativa.

Asimismo, la retracción de los hogares de la clase trabajadora informal que observamos a nivel nacional es, nuevamente, una tendencia que representa fundamentalmente al AMBA, mientras se expanden en Cuyo y NOA y tienen un aumento significativo en la Patagonia. En la misma dirección, la estabilización relativa de la pequeña burguesía pobre hacia la salida de la pandemia, no es un fenómeno que se verifique de manera homogénea. Por el contrario, en el Norte Grande y en Patagonia, se observa un crecimiento de los hogares encabezados por autónomos de bajas calificaciones y bajas dotaciones de capital.

La doble crisis tuvo entonces dinámicas dispares a nivel de la estructura social de los hogares, suponiendo un fuerte impacto en todo el país pero una recuperación relativa acotada a las regiones centrales. Estas tendencias sugieren, por tanto, que a la salida de la pandemia se habrían profundizado las desigualdades regionales.

La evolución de los ingresos per cápita familiar de los hogares en términos reales, también muestra tendencias distintas en el marco de un deterioro generalizado. Replicando lo observado a nivel nacional, su caída fue, para casi todas las regiones (a excepción del Noreste), mucho más pronunciada durante el período del gobierno de Cambiemos que en la crisis de la pandemia. Durante el primer período (2016-2019), los ingresos medios familiares reales se contrajeron en un gradiente que va del 11,4 % en la Patagonia al 16,8 % en la Región Pampeana. En la posterior crisis socio sanitaria (2019-2020), los efectos mayores en los ingresos, todos negativos, se registraron en la Región Noreste (que justamente no había sido tan impactada durante el macrismo), pero también en el AMBA y la Región Pampeana.

El deterioro neto mayor de ambas crisis acumuladas se localiza en la Región Pampeana y el AMBA. Pero en esta última, la postpandemia significa un proceso de recuperación del ingreso real relativo de una intensidad (+8,4 puntos) que no se verifica en el resto del país. Al respecto, la variación positiva en el resto de las regiones tiene rango muy menor (entre 1,2 y 3,4 puntos) o bien se observa una prolongación de la caída de los ingresos reales promedio de los hogares (en Cuyo, -0,7 y el Noroeste, -3,3).

Sin experimentar una recuperación en la postpandemia comparable en magnitud al resto, las regiones Pampeana, Cuyo y Noroeste son entonces las que salen de todo el período (2016-2021) con mayor deterioro neto de los ingresos reales promedio de sus hogares.

Estas tendencias en materia distributiva agudizaron la problemática de pobreza. Los estudios del PIRC-ESA muestran que actualmente la pobreza en Argentina incluye a casi un tercio de los hogares (un porcentaje alto en perspectiva histórica) y que no se trata solo de un fenómeno vinculado a la marginalidad de regiones periféricas y

de enclaves urbanos, como en la década de 1960, sino que afecta a amplias capas de la clase trabajadora (principalmente al segmento informal-precarizado pero también a un porcentaje del segmento formal, en particular los trabajadores manuales de la producción y la circulación) y un sector de las clases medias, principalmente la pequeña burguesía con escaso capital. La región de residencia también es un factor relevante en la probabilidad de experimentar pobreza: es mayor en las regiones de menor desarrollo relativo (NEA, NOA) o en regiones de mayor desarrollo relativo, pero con amplias zonas de marginalidad urbana (AMBA y Cuyo) evidenciando el desarrollo desequilibrado de la estructura productiva del país y su incidencia en las condiciones de bienestar material (Dalle, Carrascosa y Herrera Jurado, 2022; Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente, 2022)

Acciones colectivas y posicionamientos frente a las políticas públicas

En las páginas precedentes hemos visto los efectos de la doble crisis en la estructura de clases. En esta sección buscamos reponer los hallazgos de la investigación del PIRC-ESA en relación a dos dimensiones del proceso de formación de clases sociales: i. las acciones colectivas desarrollaron los sujetos sociales en respuesta a la situación inédita de emergencia socio-sanitaria según posición de clase y ii. la evaluación de políticas públicas durante la pandemia y el posicionamiento frente al papel del Estado en el desarrollo de políticas distributivas.

La pandemia, como vimos, tuvo un impacto profundo en las condiciones materiales de vida de la sociedad argentina y esta no se mantuvo inerte frente a estas circunstancias adversas. Ahora bien, las políticas protectoras de la salud que impusieron restricciones a la circulación y la paralización de actividades junto al temor al contagio limitaron el contexto de oportunidades para el desarrollo de acciones colectivas de reclamo público. Esto transformó

profundamente las condiciones de desarrollo de la protesta social. En este contexto, las principales acciones colectivas fueron virtuales (petitorios, foros, tuitazos) junto con las movilizaciones y concentraciones –forma tradicional de protesta–, seguida de cacerolazos y cortes de calles, dos modalidades de carácter diferente. Los principales motivos de reclamo fueron: problemas laborales (despidos, disminución de sueldo, suspensiones), derechos de las mujeres vinculados a la lucha en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, luego demandas de seguridad, justicia y contra la corrupción, y medidas contra las políticas sanitarias de restricciones a la movilidad. Tanto el tipo de protesta como los motivos de los reclamos tuvieron un carácter de clase. Las clases medias asalariadas –principalmente las capas inferiores– y los obreros desarrollaron repertorios clásicos de acción colectiva –movilizaciones y huelgas– centrada en reclamos laborales; los desocupados y trabajadores de la economía popular recurrieron a movilizaciones y cortes de calle o rutas centrando sus demandas en trabajo y vivienda; por su parte las asalariadas profesionales desarrollaron un repertorio heterogéneo y finalmente, las posiciones empresariales se asociaron con medidas anticuarentena y demandas de justicia y anticorrupción (Rebón y Troncoso, 2022).

Elbert y Morales (2022) continúan esta línea de indagación sobre la formación de clases sociales a través de la interrelación entre la dimensión objetiva y subjetiva de las posiciones de clase. En su estudio analizan el posicionamiento de las clases sociales y fracciones de clase en relación a: el Ingreso Familiar de Emergencia [IFE], el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción [ATP], la doble indemnización, el impuesto extraordinario a las grandes fortunas [IEGF] y el congelamiento de alquileres y tarifas. También examinan los posicionamientos respecto de distintas propuestas de política a implementar: disminuir los impuestos a las grandes empresas y a las pymes, mayores impuestos a la riqueza y una renta universal para sectores vulnerables. En contraste con ciertos discursos mediáticos respecto de un supuesto consenso antiestatista, su estudio muestra un alto grado de acuerdo con las políticas orientadas a la protección

social de la población trabajadora durante la pandemia y medidas de redistribución a futuro. El análisis permite identificar un bloque conformado por los segmentos informal y formal de la clase trabajadora y la clase media profesional, que apoya la intervención del estado y su papel redistributivo. Cabe destacar que, en esta coalición, la identificación política con el peronismo y la izquierda también se asocian positivamente con un posicionamiento favorable a la intervención estatal redistributiva.

Conclusiones: principales resultados y aportes para pensar políticas públicas

La estructura social argentina sufrió efectos combinados y acumulativos de la doble crisis, de distinto origen y con distinta orientación de la intervención del Estado, por la que atravesó el país entre 2016 y 2021. En exámenes detallados mostramos los efectos particulares de cada crisis desde una perspectiva de clases sociales.

La primera crisis (2016-2019) inducida por un cambio en el modelo de desarrollo económico desde el sector productivo hacia la valorización financiera y el sector primario, al producir una caída de la industria manufacturera y de los servicios básicos y de logística asociados, impactó mayormente en el segmento de la clase trabajadora formal, con una pérdida en su peso relativo en la estructura de clases y en sus niveles de ingresos. En particular, la crisis pre pandemia afectó al núcleo de la clase obrera inserto en actividades de producción y circulación. En esta dirección, la crisis implicó debilitamiento de las zonas centrales de la estructura social y crecimiento tanto del desempleo estructural como de los segmentos informal / precarizado de la clase trabajadora y la pequeña burguesía pobre.

En relación con la distribución de ingresos, las pautas 2016-2019 marcan una tendencia hacia la polarización social. En contraste con el período anterior que se había caracterizado por una disminución relativa de la desigualdad, se observa un aumento de la desigualdad

de ingresos entre los hogares del segmento formal de la clase trabajadora y los del empresariado y del estrato superior de las clases medias, de una magnitud que supuso en pocos años un retroceso de una década en términos de distribución del ingreso.

La segunda crisis, catalizada por la pandemia de COVID-19, se caracterizó por una restricción de la actividad económica de niveles inéditos como efecto de políticas sanitarias protectoras de la salud de la población, e intentó ser amortiguada por una intervención estatal orientada a sostener el empleo y mitigar el impacto en las condiciones de vida. La política laboral tuvo efectos positivos para la clase trabajadora formal, cuyos jefes/as de hogar lograron retener en gran medida sus empleos en niveles similares a períodos anteriores. Los segmentos más impactados por la pandemia fueron los hogares de la clase trabajadora informal, especialmente aquellos con jefes/as asalariados/as no registrados/as y cuentapropistas de baja calificación, y entre las clases medias, los hogares encabezados por trabajadores autónomos o microempresarios de calificaciones técnicas y operativas.

En el marco de la doble crisis, aumentaron sustantivamente los niveles de pobreza. Este fenómeno afecta principalmente a la clase trabajadora informal; sin embargo, por los altos niveles de inflación se ha reinstalado la pobreza por ingresos en capas de la clase trabajadora formal y sectores autónomos de clases medias con escasa capitalización.

Desde fines de 2020, se advierte un proceso de reactivación económica, con fuerte recuperación del empleo asalariado. La salida de la pandemia se caracterizó por un restablecimiento del peso relativo de las posiciones de clase de las zonas centrales de la estructura social: del segmento superior de la pequeña burguesía y de las posiciones asalariadas de clases medias y de la clase trabajadora formal. En perspectiva comparativa regional, cabe mencionar que este proceso de recuperación relativa tuvo epicentro en las regiones centrales: GBA, Pampeana y Centro, por lo que a la salida de la pandemia se habrían profundizado desigualdades regionales.

Asimismo, las pautas de distribución del ingreso muestran que la clase trabajadora y las clases medias no pudieron recuperar la caída de su capacidad adquisitiva producida por la doble crisis. Esta recomposición parcial está actualmente *en disputa* con sectores del capital concentrado (que han acrecentado fuertemente su capacidad de apropiación del excedente social generado en la etapa de recuperación), cuestión que se manifiesta en la fuerte escalada inflacionaria.

En el desarrollo del proyecto hemos indagado distintas dimensiones de la estructura social de Argentina que abonan a un interrogante general del objetivo de transferencia de nuestro Programa: ¿Cómo potenciar la creación de empleo y procesos de redistribución del ingreso que permitan mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y las clases medias tanto a nivel nacional como en cada una de las regiones? A partir del análisis de la Encuesta (ESAyPP / PISAC-COVID-19), de fuentes secundarias y de las entrevistas producidas por el proyecto es posible apreciar las siguientes dimensiones que aportan a la definición de lineamientos en esa dirección.

La evolución del perfil y composición de la estructura de clases de Argentina en el período 1976-2022 es el resultado a grandes rasgos de dos tendencias contrapuestas: por un lado, una tendencia de largo plazo hacia la polarización social y la expansión de la clase trabajadora informal, inducida por un modelo de desarrollo económico basado en la liberalización económica, la expansión del sector primario y la valorización financiera; por otro, una tendencia, que ha logrado sostenerse por períodos más acotados, hacia la recomposición de la clase trabajadora formal y clases medias que constituyen el centro de la estructura de clases, sobre la base de un modelo de desarrollo motorizado por el sector productivo apoyado en la redistribución del ingreso y la expansión del mercado interno.

En una dinámica bien estudiada y recurrente (Diamand, 1983) este último modelo encuentra limitaciones que se expresan como “restricción externa” derivada de una estructura productiva desequilibrada, con un sector primario agro exportador con mayor productividad que el industrial y capacidad de control de la entrada

de divisas. La superación de esta dinámica supone sostener el crecimiento de las exportaciones y avanzar en procesos de sustitución de importaciones.

Una mirada de largo plazo constata que desde el quiebre de la industrialización por sustitución de importaciones existe un núcleo de hogares encabezados por trabajadores informales, de bajos ingresos y sin aseguramiento social, que tienen una significación sostenida en la Argentina contemporánea. La investigación permite localizar también que la direccionalidad del modelo de desarrollo económico y de las políticas de empleo y sociales imponen variaciones en los niveles de su reproducción. Esto es, aún con fuertes limitaciones estructurales, la regulación e intervención estatal ha tenido capacidad de influir sobre la fisonomía y composición de la estructura de clases, así como en las condiciones de bienestar social.

Modelo de desarrollo, estructura y conflictos/movilización de clase tienen un carácter recursivo. El modelo de desarrollo define el perfil y composición que asume la estructura de clases y condiciona su correlación de fuerzas, pero, a su vez, la organización y movilización de las clases y su capacidad de articular demandas en el Estado son factores centrales en la direccionalidad del modelo de desarrollo.

Al respecto, el contexto de la pandemia abrió intersticios para una mayor participación del Estado en la planificación del desarrollo. Los resultados de nuestro proyecto de investigación mostraron tanto las limitaciones del mercado para garantizar la reproducción de amplios segmentos de la clase trabajadora como la centralidad que asumió el Estado en el sostenimiento de los hogares. El papel ejercido por el Estado en ese momento de incertidumbre social excepcional parecía abrir una ventana de oportunidad para ampliar su papel en la planificación del desarrollo y más en general, respecto de orientaciones progresistas futuras. En esa dirección, aun cuando en el contexto actual, fuertemente condicionado por el endeudamiento externo, amplios sectores del sistema político refuerzan su orientación pro mercado, nos interesa enfatizar que los resultados de nuestra investigación nos permitieron identificar también la presencia

de una coalición que apoya el papel activo del Estado en la redistribución de recursos, que tiene como centro la clase trabajadora en sus distintos segmentos e involucra además amplios sectores de las clases medias. En qué medida esta coalición distributiva logrará ampliar y profundizar sus soportes sociales y culturales, y articularse en una fuerza social que vuelva a disputar la direccionalidad del modelo de desarrollo, es un proceso que todavía está abierto.

Bibliografía

Actis Di Pasquale, E.; Gallo, M. E., y Capuano, A. (2022). El impacto de la doble crisis prepandemia y pandemia sobre el mercado laboral argentino. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo I. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Beccaria, L. y Maurizio, R. (2017). Mercado de trabajo y desigualdad en Argentina. Un balance de las últimas tres décadas. *Sociedad*, 37, 15-41.

Belloni, P.; Brown, B. y Fernández Massi, M. (2022). Las brechas de género laborales en la Argentina durante la pandemia por COVID-19. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo I. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Benza, G., y Arancio, M. (2022). *La resolución del bienestar en Argentina durante la pandemia. Desigualdades regionales y entre clases sociales en las fuentes de ingresos de los hogares*. Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales, Buenos Aires.

Benza, G.; Dalle, P. y Maceira, V. (2022). Estructura de clases de Argentina (2015-2021): efectos de la doble crisis pre pandemia y pandemia en el empleo, los ingresos y los gastos de los hogares. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo I. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Boniolo, P. y Estévez Leston, B. (2022). Teletrabajo, cargas de cuidado y estrategias socio-habitacionales en la pandemia de COVID-19. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo I. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Busso, M.; González, F. M. y Brown, B. (2022). La economía Ppopular como actor económico. La construcción de su identidad colectiva en tiempos de Pandemia. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Respuestas estatales, experiencias de trabajadoras/es y estrategias colectivas de resistencia en tres sectores estratégicos*. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Chávez Molina, E. y Rodríguez de la Fuente, J. (2022). Pobreza en tiempos de pandemia. Un abordaje desde la estructura de clases ocupacionales. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo I. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Dalle, P. (comp.) (2022). *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomos I y II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Dalle, P.; Carrascosa, J. y Herrera Jurado, B. (2022). Desigualdad de clase acumulativa e interseccional. Nudos de reproducción intergeneracional de la pobreza y canales de ascenso social. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia*.

Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa. Tomo I. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Dalle, P. y Di Virgilio, M. (En prensa). Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia de COVID-19: el diseño de una encuesta nacional comparativa interregional, *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 12 (2).

Dalle, P. y Actis Di Pasquale, E. (2021). El impacto de la doble crisis de la prepandemia y la pandemia en las tendencias ocupacionales en Argentina (2003-2020). *Tramas*, (15), 30-48.

Diana Menéndez, N. y Arias, C. (2022). Las plataformas de reparto en Argentina durante la pandemia: experiencias de organización colectiva e iniciativas de regulación. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Díaz Langou, G.; Della Paollera, C. y Echandi, J. (2021). El sistema de protección social argentino frente a la pandemia: viejos desafíos y nuevas oportunidades. *Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales*, 8.

Elbert, R. y Morales, F. (2022). Clase social y evaluación de políticas públicas. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo I. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Fernández Álvarez, M. I.; Laurens, M. P., y Stefanetti, C. (2022). Sostener la vida: las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular más acá y más allá de la pandemia del COVID-19. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Germani, G. (1980). *El concepto de marginalidad*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Germani, G. (1955). *Estructura social de la Argentina*. Buenos Aires: Raigal.

González, N.; Nieva, F y Bergesio, L. (2022). Las voces de la economía popular: problemáticas en pandemia y desafíos ante el Estado. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Gutiérrez, A.; Mansilla, H. y Assusa, G. (2022). Estrategias económicas familiares durante la pandemia. Clases sociales, ingresos monetarios, finanzas y consumos. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo I. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Haidar, J. y Bordarampé, G. (2022). La logística de última milla: impactos de la pandemia en las plataformas de reparto en Argentina. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Hoszowski, A., y Piovani, J. I. (2018). La Encuesta Nacional sobre la Estructura Social. En J. I. Piovani y A. Salvia (eds.), *La Argentina en el siglo XXI* (pp. 27-46). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Hout, M. (2008). How Class Works: Objective and Subjective Aspects of Class Since the 1970s. En A. Lareau y D. Conley (eds.), *Social Class: How Does It Work?* (pp. 25-64). Russell Sage Foundation.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2020). *Informes Técnicos*, 4 (174).

Kasparian, D.; Súnico, A. y Naranjo, C. (2022). Estrategias, demandas y desafíos de las empresas recuperadas frente a la pandemia del COVID-19. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Labrunee, M. E., y Gispert, A. (2022). Estrategias colectivas e individuales en la Economía Popular. La recuperación de materiales en vía pública en Mar del Plata. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

López, J. y Hermida, Mariano. (2022). ¿En qué condiciones continuó la escolarización durante la pandemia por COVID-19 en Argentina? Una mirada según clase social. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo I. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Maceira, V. (2021). Cambios en la estructura socio-ocupacional en Argentina en el período 2016 -2020: entre la restauración neoconservadora y la crisis socio-sanitaria. *Revista Realidad Económica*, 51 (344).

Maceira, V. (2015). Un abordaje teórico-metodológico para la investigación de la estructura, la movilidad social y las condiciones de vida: La propuesta ENES-Pisac. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 5 (2): 1-38.

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2022). *RENATEP Características laborales y productivas en la economía popular. Informe abril 2022. Datos a febrero 2022*. Secretaria de Economía Social, Argentina.

Natalucci, A.; Fernández Mouján, L. y Mate, E. (2022). La intervención del Estado frente la crisis de COVID-19 para el sector de la economía popular (AMBA, 2020-2021). En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Nun, J. (1969). Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal, *Revista Latinoamericana de Sociología*, 2.

Nun, J.; Murmis, M., y Marín, J. C. (1968). La marginalidad en América Latina. *Informe preliminar. Documento de Trabajo*. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella. Centro de Investigaciones Sociales.

Ojeda, V.; Zinger, S.; Kesque Hreñuk, J. I.; Patagua, E. y Sakamoto, G. (2022). La esencialidad de y en la economía popular. Organizaciones, estrategias y dinámica de las relaciones mediatizadas por el trabajo en tiempos de pandemia en Chaco, Corrientes y Jujuy. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Palomino, H. y Dalle, P. (2022). Trabajadores en la salida de la pandemia: convergencia a partir de la diversidad. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Patton, M. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Thousand Oaks: SAGE.

Pol, M. A.; Paz, L. B., y Galetto, S. (2022). Los efectos de la doble crisis en el perfil de especialización del empleo formal. Un análisis regional comparado para el período 2015-2021. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la*

doble crisis y recomposición social en disputa. Tomo I. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Rebón, J. y Troncoso, F. (2022). La estructura social en la protesta durante la crisis del COVID-19. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo I. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

RIPPSO (2020), Relevamiento de intervenciones sociales del Estado frente al COVID-19. Red Interuniversitaria de Posgrados en Políticas Sociales. <http://rippso.com.ar/relevamiento-covid-19/>

Sala, G. y Del Águila, Á. (2022). Después del temporal. Ocupaciones de la construcción hacia el final del ASPO. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Sautu, R. (2019). *Estrategias teórico-metodológicas en el diseño de la investigación en ciencias sociales*. Buenos Aires: Lumiere.

Sautu, R. (1969). *Economic Development and Social Stratification in Argentina*. [Tesis de doctorado]. The London School of Economics and Political Science, University of London.

Sautu, R. y Carrascosa, J. (2022). La vulnerabilidad del hogar frente a situaciones de riesgo social. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo I. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Schmidt, M.; Tobías, M. y Merlinsky, G. (2022). Infraestructura hídrica y desigualdades sociales en el marco de la pandemia: barrios populares del Gran Buenos Aires y zonas rurales y periurbanas del Chaco salteño. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en*

tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA – Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Torrado, S. (1992). *Estructura social de la Argentina: 1945-83*. Buenos Aires: De la Flor.

Torricella, A. y Toyos, F. (2022). Trabajar en casa, el trabajo de la casa y el trabajo de cuidados en tiempos de pandemia de COVID-19: articulaciones, conflictos y estrategias del sector Ciencia y Universidad. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Unzué, M.; Emiliozzi, S.; Zeitlin, A. y Bergesio, L. (2022). Cambios, reorganizaciones y mutaciones en el trabajo productivo ante la pandemia de COVID-19. Su impacto en organismos científicos y tecnológicos y universidades de Argentina. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Zibecchi, C. y Barbetti, P. (2022). Procesos de institucionalización de la Economía Social y Popular. Respuestas estatales y estrategias de reconversión en el contexto de pandemia. En P. Dalle (comp.), *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*. Tomo II. Buenos Aires: IIGG UBA - Agencia I+D+i / Imago Mundi.

Wright, E. O. (1994). *Clases*. Madrid. Siglo XXI.

Wright, E. O. (2018). *Comprender las clases sociales*. Madrid: Akal.